

**1) SUST CON PODER GRAL 2) CONT REFORMA DDA 3) EXPDTE ADMTVO ORDINARIO
LABORAL de MARTHA HELENA GUZMAN MESA vs COLPENSIONES Radicación:
41001310500120230039800**

Juan Álvaro Duarte Rivera <magisteriuris@yahoo.com>

Mié 07/02/2024 14:31

Para: Juzgado 01 Laboral Circuito - Huila - Neiva <lcto01nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: abogado.josefrancisco@gmail.com <abogado.josefrancisco@gmail.com>; Laura Katherine Miranda Contreras

<notificacionesjudiciales@porvenir.com.co>; Buzon Procesos Judiciales <procesosjudiciales@colfondos.com.co>;

procesosnacionales@defensajuridica.gov.co <procesosnacionales@defensajuridica.gov.co>; Procesos Judiciales - Oficina Juridica

<procesosjudiciales@procuraduria.gov.co>

 3 archivos adjuntos (22 MB)

51694065 MARTHA HELENA GUZMAN MESA SUSTIT Y PODER GRAL.pdf; 51694065 MARTHA HELENA GUZMAN MESA EXPED
ADTVO.rar; 51694065 MARTHA HELENA GUZMAN MESA CONT REFORMA DDA TRASL REG PENSIONADO IMD DAÑ PERJ.pdf;

Señor Juez

JUZGADO 001 LABORAL DE CIRCUITO DE NEIVA

E. S. D.

**ASUNTO: 1) SUSTITUCIÓN CON PODER GENERAL
2) CONTESTACIÓN REFORMA DE LA DEMANDA Y EXCEPCIONES
3) EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO**

REF. ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA interpuesto por MARTHA HELENA GUZMAN MESA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES-.

Radicación: 41001310500120230039800

JUAN ÁLVARO DUARTE RIVERA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Neiva, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 79'523.279 expedida en Bogotá, abogado en ejercicio con tarjeta profesional Nro. 192.928 del C.S. de la J., obrando como apoderado judicial sustituto de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES en adelante COLPENSIONES, en sustitución que me hiciera para actuar dentro del presente proceso MAURICIO ROA PINZÓN, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 79.513.792 de Bogotá, D.C., y tarjeta profesional No. 178.838 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de representante principal de la UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023, con N.I.T 901.761.609-8 y en calidad de Apoderado Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, conforme poder general que le fuera concedido por DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.983.390 expedida en Bogotá D.C., en su condición de representante legal suplente de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, cordialmente solicito al Despacho reconocermé personería para actuar de acuerdo al poder adjunto y estando dentro del término de la oportunidad procesal, de manera respetuosa **anexo:**

**1) Sustitución con poder general
2) Contestación reforma de la demanda y excepciones
3) Expediente administrativo**

Cortésmente,

JUAN ÁLVARO DUARTE RIVERA
C.C. 79'523.279 de Bogotá D.C.
T.P. 192.928 del C. S. de la J.

Mens Agitat Molem (La mente mueve lamateria)
Publio Virgilio Maron

MAGISTER IURIS

AVISO IMPORTANTE: Esta comunicación es privada, reservada, privilegiada, confidencial y es para fines informativos solamente. Esto no pretende ser y no debe ser interpretado en cualquier forma o manera como un contrato, acuerdo, pacto, convenio, inversión o una oferta. Nada en este mensaje debe interpretarse como una firma digital o electrónica que pueda utilizarse para autenticar o validar un contrato u otro documento legal. Esta comunicación electrónica y los archivos incluidos en la comunicación contienen información confidencial exclusiva para el destinatario. Cualquier divulgación, copia, distribución o uso de cualquiera de la información contenida o atada a esta transmisión está estrictamente prohibido. Si este mensaje se ha recibido por error o por re-envío de un tercero, no deberá tomar acción alguna basándose en la información que contiene este correo electrónico y deberá ser destruido.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El remitente no ofrece ninguna garantía o representación como comprador, vendedor o asesor para cualquier tipo de transacción o negocio. Todo esto se debe realizar con la debida diligencia y responsabilidad de forma directa por parte de los interesados. Esta carta de correo electrónico y sus elementos adjuntos de ningún modo pueden considerarse una solicitud para cualquier fin, en cualquier forma o contenido. Una vez recibido este documento, el Receptor reconoce el presente Aviso Legal. Si el reconocimiento no es aceptado, el receptor deberá devolver el documento y anexos en su estado original al remitente. El uso no autorizado del contenido y/o de los adjuntos de este mensaje será de responsabilidad directa de quien lo haga, tanto por envío no autorizado como por manipulación del texto y/o de los adjuntos, dichas acciones invalidarán el mensaje en su contenido, intención y finalidad.



Libre de virus. www.avg.com

UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

Señor Juez
JUZGADO 001 LABORAL DE CIRCUITO DE NEIVA
E. S. D.

ASUNTO: CONTESTACIÓN REFORMA DE LA DEMANDA Y EXCEPCIONES

REF. ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA interpuesto por **MARTHA HELENA GUZMAN MESA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-**.

Radicación: 41001310500120230039800

JUAN ÁLVARO DUARTE RIVERA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Neiva, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 79´523.279 expedida en Bogotá, abogado en ejercicio con tarjeta profesional Nro. 192.928 del C.S. de la J., obrando como apoderado judicial sustituto de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES en adelante COLPENSIONES, en sustitución que me hiciera para actuar dentro del presente proceso MAURICIO ROA PINZÓN, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 79.513.792 de Bogotá, D.C., y tarjeta profesional No. 178.838 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de representante principal de la UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023, con N.I.T 901.761.609-8 y en calidad de Apoderado Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, conforme poder general que le fuera concedido por DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.983.390 expedida en Bogotá D.C., en su condición de representante legal suplente de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, cordialmente solicito al Despacho reconocirme personería para actuar de acuerdo al poder adjunto y estando dentro del término de la oportunidad procesal, de manera respetuosa contesto la demanda propuesta dentro del proceso de la referencia instaurada contra mi representada, para que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se absuelva a COLPENSIONES de todas y cada una de las pretensiones propuestas en la demanda y se condene en costas a la parte demandante.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO

La Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- es una empresa industrial y comercial del estado del orden nacional, organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005 modificadorio del artículo 48 de la constitución Política, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle. La representación legal la ejerce el Doctor MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 79.481.221 quien obra en su calidad de Presidente según consta en el Acuerdo No. 0054 del 12 de Agosto de 2013 y Acta de Posesión No. 1279 del 16 de agosto de 2013. El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 11, número telefónico 2170100

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

I. A LOS HECHOS

Primero: Es cierto conforme a la copia simple del documento que obra en el plenario.

Segundo: No le consta a la entidad demandada, el hecho hace alusión a aparentes actuaciones realizadas por personas ajenas a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. Este hecho debe ser objeto de debate probatorio.

Tercero: No es un hecho interpartes, es una apreciación que realiza el apoderado actor tendiente a favorecer las pretensiones.

Cuarto: No le consta a la entidad demandada, el hecho hace alusión a aparentes actuaciones realizadas por personas ajenas a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. Este hecho debe ser objeto de debate probatorio.

Quinto: No le consta a la entidad demandada, el hecho hace alusión a aparentes actuaciones realizadas por personas ajenas a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. Este hecho debe ser objeto de debate probatorio.

Sexto: No le consta a la entidad demandada, el hecho hace alusión a aparentes actuaciones realizadas por personas ajenas a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. Este hecho debe ser objeto de debate probatorio.

Séptimo: No le consta a la entidad demandada, el hecho hace alusión a aparentes actuaciones realizadas por personas ajenas a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. Este hecho debe ser objeto de debate probatorio.

Octavo: No le consta a la entidad demandada, el hecho hace alusión a aparentes actuaciones realizadas por personas ajenas a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. Este hecho debe ser objeto de debate probatorio.

Noveno: No le consta a la entidad demandada, el hecho hace alusión a aparentes actuaciones realizadas por personas ajenas a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. Este hecho debe ser objeto de debate probatorio.

Décimo: Es cierto conforme a la copia simple del documento que obra en el plenario.

Décimo primero: No es cierto. No es un hecho, es una apreciación subjetiva que realiza el apoderado actor tendiente a favorecer las pretensiones.

Décimo segundo: No es cierto. No es un hecho, es un cálculo subjetivo que realiza el apoderado actor tendiente a favorecer las pretensiones.

Décimo tercero: No es cierto. No es un hecho, es una apreciación subjetiva que realiza el apoderado actor tendiente a favorecer las pretensiones.

Décimo cuarto: No le consta a la entidad demandada, el hecho hace alusión a aparentes actuaciones realizadas por personas ajenas a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. Este hecho debe ser objeto de debate probatorio.

Décimo quinto: No es un hecho interpartes. Otorgar poder es ejercer el Derecho de representación en virtud de un contrato de mandato.

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

II. A LAS PRETENSIONES

Me opongo a todas y cada una de las pretensiones por considerarlas infundadas, contrarias a derecho y por no encontrar respaldo en la realidad de los hechos, como quiera que no se evidencia la ocurrencia de una vía de hecho en materia pensional, que comprometa el debido proceso, no se desconocen derechos irrenunciables de carácter pensional, ni se ha ignorado la favorabilidad laboral y los derechos adquiridos de la demandante y no se afecta la seguridad social de sujetos de especial protección constitucional.

PRINCIPALES

A LA PRIMERA PRETENSIÓN: No está llamada a prosperar por cuanto, tal como se advierte con el formulario de afiliación anexo a la demanda la demandante acepta que el traslado que realizo del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, lo realizó de manera, libre y voluntaria y aceptando las condiciones jurídicas del cambio de régimen pensional.

Por cuanto en el caso de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones, tuvieran treinta y cinco (35) años o más si son mujeres, o cuarenta (40) años o más si son hombres, éstas pueden trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años contados a partir de la selección inicial, salvo que les falte diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, evento en el cual no podrán ya trasladarse.

Aunado a lo anterior **En todo caso, de ser viable dicho traslado o haberse efectuado el mismo al momento de proferirse la presente providencia, ello no da lugar, bajo ninguna circunstancia, a recuperar el régimen de transición.** (Sentencia SU 130-13) (Subraya y negrilla fuera de texto).

A LA SEGUNDA PRETENSIÓN: No está llamada a prosperar en cuanto el Literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003 “Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.

A LA TERCERA PRETENSIÓN: No está llamada a prosperar por cuanto, tal como se advierte con el formulario de afiliación anexo a la demanda la demandante acepta que el traslado que realizo del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, lo realizó de manera, libre y voluntaria y aceptando las condiciones jurídicas del cambio de régimen pensional.

Por cuanto en el caso de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones, tuvieran treinta y cinco (35) años o más si son mujeres, o cuarenta (40) años o más si son hombres, éstas pueden trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años contados a partir de la selección inicial, salvo que les falte diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, evento en el cual no podrán ya trasladarse.

Aunado a lo anterior **En todo caso, de ser viable dicho traslado o haberse efectuado el mismo al momento de proferirse la presente providencia, ello no da lugar, bajo ninguna circunstancia, a recuperar el régimen de transición.** (Sentencia SU 130-13) (Subraya y negrilla fuera de texto).

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

A LA CUARTA PRETENSIÓN: Debe ser negada, en razón a que las costas procesales no son un Derecho, en este sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. SL 4959-2016. Radicación N° 47984 del veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016), donde refiriendo decisión del 26 jun 1997, Rad. 9574, precisó:

Siendo las costas una consecuencia procesal del ejercicio de la acción instaurada, obviamente no pueden ser consideradas como materia principal de un proceso laboral en cuanto dependen de su resultado; y al tener por objeto resarcir los perjuicios causados o reembolsar los gastos ocurridos por la actividad de los litigantes, no pueden ser tenidas como un derecho sustantivo de naturaleza laboral....

Y, en providencia del 9 de febrero de 1999, Rad. 11360, se señaló:

La Sala tiene definido que las costas del juicio no constituyen el objeto de éste, en tanto se conciben como una consecuencia procesal de la acción promovida o de las excepciones propuestas. Como tales están sujetas al resultado de dicha acción o excepción y destinadas a resarcir los gastos ocasionados; luego, no configuran un derecho sustantivo laboral, de suerte que no puede pretenderse su imposición....

A LA QUINTA PRETENSIÓN: Debe ser negada por cuanto fallar Ultra y Extrapetita es una facultad de los Jueces Laborales, no una pretensión, al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-662 del 12 de noviembre de 1998 indicó:

“El ejercicio de la mencionada potestad que tienen los jueces laborales de primera instancia no es absoluto, pues presenta como límites el cumplimiento de las siguientes condiciones: i.) que los hechos en que se sustenta se hayan debatido dentro del proceso con la plenitud de las formas legales y ii.) que los mismos estén debidamente probados; y, además, iii.) que el respectivo fallo sea revisado por el superior, en una segunda instancia, quien “puede confirmar una decisión extra petita de la primera instancia, si ella es acertada, o revocarla en caso contrario, o modificarla reduciéndola si el yerro del inferior así lo impone, decisión que no puede ser aumentada ya que, de lo contrario, sería “superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercitó el a quo y esto no le está permitido al ad quem”, ni tampoco agravarla en vigencia del principio procesal de la no reformatio in pejus, garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso (C.P., arts. 29 y 31).

SUBSIDIARIAS

A LA PRIMERA PRETENSIÓN: No está llamada a responder la ADMINISTRADORA. COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, en atención a lo consagrado en el artículo 2343. Del Código Civil:

<PERSONAS OBLIGADAS A INDEMNIZAR>. Es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos.

Aunado a lo anterior se observa que la demandante estructuró su derecho pensional a partir del 05 de septiembre del año 2017 y en la medida que **el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, el término de prescripción de la acción debe contarse desde este momento.**¹ (subraya y negrilla fuera de texto)

¹ SL373-2021. M. P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO. 10 de febrero 2021

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

N.I.T No. 901.761.709-8

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

A LA SEGUNDA PRETENSIÓN: No está llamada a responder la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, me ratifico en lo indicado en el pronunciamiento frente a la primera pretensión subsidiaria.

A LA TERCERA PRETENSIÓN: Debe ser negada, en razón a que las costas procesales no son un Derecho, en este sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. SL 4959-2016. Radicación N° 47984 del veinte (20) de abril de dos mil dieciséis (2016), donde refiriendo decisión del 26 jun 1997, Rad. 9574, precisó:

Siendo las costas una consecuencia procesal del ejercicio de la acción instaurada, obviamente no pueden ser consideradas como materia principal de un proceso laboral en cuanto dependen de su resultado; y al tener por objeto resarcir los perjuicios causados o reembolsar los gastos ocurridos por la actividad de los litigantes, no pueden ser tenidas como un derecho sustantivo de naturaleza laboral....

Y, en providencia del 9 de febrero de 1999, Rad. 11360, se señaló:

La Sala tiene definido que las costas del juicio no constituyen el objeto de éste, en tanto se conciben como una consecuencia procesal de la acción promovida o de las excepciones propuestas. Como tales están sujetas al resultado de dicha acción o excepción y destinadas a resarcir los gastos ocasionados; luego, no configuran un derecho sustantivo laboral, de suerte que no puede pretenderse su imposición....

A LA CUARTA PRETENSIÓN: Debe ser negada por cuanto fallar Ultra y Extrapetita es una facultad de los Jueces Laborales, no una pretensión, al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-662 del 12 de noviembre de 1998 indicó:

“El ejercicio de la mencionada potestad que tienen los jueces laborales de primera instancia no es absoluto, pues presenta como límites el cumplimiento de las siguientes condiciones: i.) que los hechos en que se sustenta se hayan debatido dentro del proceso con la plenitud de las formas legales y ii.) que los mismos estén debidamente probados; y, además, iii.) que el respectivo fallo sea revisado por el superior, en una segunda instancia, quien “puede confirmar una decisión extra petita de la primera instancia, si ella es acertada, o revocarla en caso contrario, o modificarla reduciéndola si el yerro del inferior así lo impone, decisión que no puede ser aumentada ya que, de lo contrario, sería “superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercitó el a quo y esto no le está permitido al ad quem”, ni tampoco agravarla en vigencia del principio procesal de la no reformatio in pejus, garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso (C.P., arts. 29 y 31).

En consecuencia, solicito al Señor Juez, se absuelva a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES, de todo cargo y condena de conformidad con los planteamientos esbozados en la presente Contestación.

III. ARGUMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA DEFENSA

AFILIACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Efectos de la entrada en vigencia de ese Sistema en el nivel territorial, el cual no excluyó la existencia de convenciones colectivas en las que se reconocen derechos pensionales, sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes. El Acto Legislativo 01 de 2005 fue claro en establecer que se protegían los derechos adquiridos bajo el amparo de laudos, pactos o convenciones colectivas, señalando que en todo caso tales previsiones perderían su vigencia el 31 de julio de 2010. Por tratarse de trabajadores que estaban al

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

N.I.T No. 901.761.709-8

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

servicio del Municipio a la entrada en vigencia del Sistema y que no contaban con los requisitos para acceder a la pensión, les correspondía la selección de administradora y de régimen pensional. De estar confirmada la omisión de afiliar, una vez el trabajador seleccione administradora, el Municipio deberá trasladar la suma resultante del cálculo actuarial a satisfacción de la entidad administradora respectiva. Ante el silencio de los trabajadores en la elección de régimen pensional y administradora, el empleador cumplirá con la obligación de trasladar las sumas por concepto de aportes a cualquiera de las entidades administradoras, sin perjuicio de que con posterioridad, el trabajador se traslade de régimen o de administradora. (Concepto 2010092444-001 del 8 de febrero de 2011. Superintendencia Financiera.)

EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 CONSAGRA EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN para aquellas personas que al momento de entrar en vigencia dicha norma tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres o 15 años de servicio, señalando que no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad o para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

En ese orden de ideas las personas que se trasladen al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad y posteriormente se devuelvan al 155, no conservaran el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Constitucional en sentencias C-789 de 2002 y SU-062 de 2010 en concordancia con el Decreto 692 de 1994 y el decreto 3995 de 2008 señalo que las personas que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994 o 30 de junio de 1995 en el caso de servidores públicos del orden territorial) ostenten 15 años de servicio y/o cotizaciones conservaran el régimen de transición en caso de traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida siempre que reúnan los siguientes requisitos:

i) Al cambiarse nuevamente al régimen de prima media se traslade a él todo el ahorro que habían efectuado el afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad incluyendo lo que la persona aportó al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

ii) Dicho ahorro no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media con prestación definida.

Por lo anterior solo las personas que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones acrediten 15 años o más de servicios y/o cotizaciones (750 semanas) conservaran el régimen de transición en caso de traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida cuando cumplan los requisitos anteriormente señalados.

Que según lo dispuesto en el inciso segundo de la Ley 100 de 1993, las personas que a 1 de abril de 1994 tuviesen 35 años o más de edad si son mujeres y 40 o más años de edad en el caso de los hombres o quince (15) o más años de servicio se les debe aplicar la edad para pensionarse, el número de semanas o tiempo cotizado y el monto pensional del régimen anterior al que venían afiliados, encontrando que el asegurado, reúne los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición anterior manifestado.

Sobre el beneficio del Régimen de Transición, es procedente manifestar que de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo transitorio 4, **el Régimen de Transición no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010;** excepto para los trabajadores que estando en dicho Régimen, además tengan cotizadas 750 semanas o

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del mencionado Acto Legislativo (22 de julio 2005); a los cuales se les mantendrá hasta el año 2014.

En relación a los hechos y las pretensiones de la demanda, los altos Tribunales se han pronunciado de la siguiente manera:

De conformidad con el artículo 12 de la ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad Social en Pensiones está compuesto por dos regímenes, excluyentes, los cuales coexisten, a saber: Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con solidaridad.

El artículo 13 literal b) ibíd., prescribe que la selección de los dos regímenes es libre y voluntaria por parte del afiliado, y para tal efecto debe manifestar su elección al momento de la vinculación o traslado; estos se pueden dar cada cinco (5) años contados a partir de la selección inicial, pero en todo caso existe la prohibición de que no puede existir traslado cuando al afiliado, le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.

NULIDAD / INEFICACIA DE TRASLADO PERSONA STATUS PENSIONADA

SL373-2021. Radicación n.º 84475. Magistrada ponente CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO. Diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al *statu quo ante*) (**SL1688-2019, SL3464-2019**), lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones:

Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que reversar esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.

Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata.

Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AFP. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de opciones pensionales intervienen en la

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado.

Por lo tanto, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida.

Si se trata de una garantía de pensión mínima, volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requería la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defienda los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono.

Ni que decir cuando el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente, o de aquellos casos en que ha optado por los excedentes de libre disponibilidad (art. 85 de la Ley 100 de 1993), en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados, inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.

La Corte podría discurrir y profundizar en muchas más situaciones problemáticas que generaría la invalidación del estado de pensionado. No obstante, considera que **los ejemplos citados son suficientes para demostrar el argumento según el cual la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones.** (subraya y negrilla fuera de texto)

De acuerdo con lo expuesto, la Corte abandona el criterio sentado en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado.

ACERCA DE LA INFORMACIÓN AL AFILIADO

La Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 17595 de 2017, señaló que existe un deber de entregar información a la medida de la asimetría entre un administrador experto y un afiliado lego. Es decir que, entre más experto el afiliado menos asimetría con la información del mercado.

Por lo tanto, existen diferencias entre los afiliados al sistema de pensiones y no todos pueden ser considerados como inexpertos o incapaces de tomar una decisión acertada. Según la Corte existen actividades que dan cuenta de un verdadero entendimiento del afiliado, que, en sí, obedecen a las obligaciones de todo vinculado al sistema pensional, como son: (ver: SL 413-2018 C.S.J.)

- ☐ Solicitar información de saldos.
- ☐ Actualizar datos.
- ☐ Asignar y cambiar claves.
- ☐ Por mencionar algunos actos de relacionamiento con la entidad que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella.

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

Existen otros adicionales como:

☐ Traslados entre fondos privados

En este sentido, es importante traer a colación el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Sala Laboral, en grado Jurisdiccional de Consulta, dentro del proceso 66001310500120170008501, demandante María Victoria Calle Correa, demandados Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A., en el cual se resolvió revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar absolver a las demandadas.

Dentro del fallo referido consideró el Tribunal lo siguiente:

“Puestas de ese modo las cosas, resulta imprescindible mencionar lo dispuesto en el art. 1604 del C.C. que exige que “la prueba de la diligencia y cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega”, no obstante lo anterior, dicha obligación probatoria aparece como respuesta inmediata a alguien que previamente ha alegado el incumplimiento de una obligación por parte de su deudor, en esa medida, quien alega un incumplimiento obligacional deberá probar el supuesto de hecho de la norma que consagra el efecto jurídico perseguido (art. 167 C.G.P), o en otras palabras, deberá probar la obligación incumplida para que se presuma que ello se dio por culpa de la contraparte, quien en respuesta de tal cuestionamiento tendrá la carga de demostrar la diligencia o cuidado en la obligación pactada.

En conclusión en los procesos tendientes a dejar sin efectos una afiliación hecha a cualquiera de los dos regímenes, con el propósito de volver a elegir el que desee, esta vez de forma libre y espontánea, deberá acreditar imperiosamente que la AFP a la que se afilio incumplió en la etapa precontractual con su obligación principal, esto es, brindarle la información adecuada, completa y veraz para tomar una decisión bajo el principio de libertad informada y en esa medida poder dar rienda suelta al art. 1604 del C.C., pues la presunción allí establecida no es el cumplimiento de la obligación sino la culpa en tal incumplimiento, iterase, una vez probado este.”

(...)

Dicho de otra forma, la asesoría brindada por la AFP debe restringirse a informar al afiliado de todas y cada una de las características del RAIS frente al RPM, además de su solidez financiera (art. 97 del Decreto 663/1993 y sus modificaciones), sin que dicha información pueda analizarse desde la óptica de un buen o mal consejo, pues ello implicaría usurpar la voluntad del afiliado, única persona que después de conocer las características del régimen podrá sopesar si la escogencia del RAIS resulta adecuada y atractiva para el fortalecimiento de su vida, pues al gozar de capacidad de ejercicio, quien celebra el contrato de afiliación está en condiciones de entender las incidencias de la escogencia a partir de la información que ha recibido.

A tono con lo anterior, se concluye que María Victoria Calle Correa no solo suscribió el formulario de vinculación al RAIS a través de Protección S.A., que cumplió los lineamientos fijados en la ley, sino que reiteró su voluntad de permanencia en dicho régimen, al trasladarse a Porvenir S.A. lo que supone que estaba conforme con los beneficios que venía disfrutando desde 1995 cuando ingresó a él”. (subrayado fuera de texto original)

APLICACIÓN INDEBIDA DEL ARTÍCULO 1.604 DEL CÓDIGO CIVIL PUESTO QUE NO SE ATIENDE DE FORMA SISTEMÁTICA OTRAS NORMAS DEL MISMO ESTATUTO QUE PROHÍBEN

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

N.I.T No. 901.761.709-8

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

Alegar la ignorancia de la ley en los negocios jurídicos (error de derecho). De esta manera es necesario demostrar la existencia de un vicio del consentimiento.

Es importante precisar que la Corte Suprema, dentro de los fallos relativos a nulidad o inexistencia del traslado de régimen, fundamenta parte de su decisión en el código Civil (artículo 1604) pero desconoce otras normas del mismo estatuto que establecen correlativamente obligaciones en relación con el demandante. Así pues, en lo que atañe al vínculo que genera el contrato de afiliación el Art. 1495 del aludido código civil dispone:

“Artículo 1495. Definición de contrato o convención. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas”.

Así pues, es claro que la afiliación a cualquiera de los Regímenes comprende un acuerdo de voluntades que lo convierte en un contrato que reúne las siguientes particularidades:

- ☐ Por sus características comprende obligaciones de tipo contractual. (Art. 1495 del C.C.).
- ☐ Tiene un carácter formal, pues es obligatoria y solemne (Afiliación y desafiliación tácita)
- ☐ Es libre y voluntaria (Lit. b. del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.)
- ☐ Es bilateral, por lo tanto, existen obligaciones recíprocas (Decreto 2241 de 2010) ☐ De adhesión, en tanto el afiliado se acoge a las condiciones propias del régimen seleccionado, siendo que estas emanan de la ley.
- ☐ Aleatorio, ya que el hecho de que eventualmente algunas prestaciones de una de las partes pueden depender de un acontecimiento futuro e incierto (invalidéz, vejez o sobrevivientes).

De esta manera no es dable que, atendiendo exclusivamente a las obligaciones de la AFP, se invierta la carga de la prueba bajo un criterio de responsabilidad objetiva, desconociendo con ello las obligaciones paralelas en cabeza del cotizante, y desplazando las propias circunstancias del caso.

Respecto a la presunción legal juris ignorantia non prodest consagrada en el artículo 1509 del C.C. y el artículo 9 ibídem, relativa a que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, la Corte Constitucional en la sentencia C 993 de 2006, señaló “...que el error de derecho no da lugar a la declaración judicial de nulidad del negocio jurídico y que, por tanto, la parte de éste que lo cometió debe asumir todas las consecuencias de su celebración, precisamente porque el artículo 36 de la ley 100 de 1993, es claro en señalar que el traslado al RPM ocasiona la pérdida del régimen de transición.

Se otorga un alcance que no corresponde al contenido de los Decretos 663 de 1993 y 692 de 1994, en cuanto a la voluntad vertida en el formulario de afiliación.

Dentro de los fallos analizados, la Corte Suprema otorga un alcance que no corresponde al contenido de los Decretos 663 de 1993 y 692 de 1994, en cuanto a la voluntad vertida en el formulario de afiliación.

Según la primera definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua RAE, la palabra libre es un adjetivo que significa: “Que tiene facultad para obrar o no obrar”; y la palabra “voluntario” la define así: “Dicho de un acto: Que nace de la voluntad, y no por fuerza o necesidad extrañas a aquella”.

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

La Corte Constitucional, en la sentencia T-422/11 describió la decisión libre y voluntaria del egresado como aquella en la cual “no puede mediar acto de imposición o apremio por parte de autoridad alguna”.

Así mismo, valoró las particularidades del caso concreto y el contexto en el cual se desarrollaron los hechos, así:

“Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos objeto de esta controversia, la afirmación del actor resulta creíble; en efecto, que los aportes objeto del traslado fueran posteriormente devueltos por parte de Skandia al I.S.S, sin conocimiento ni autorización del actor, es un hecho que no contrasta con el hallazgo de esta Sala, consistente en considerar que para el afiliado era muy difícil comprender las implicaciones del documento que firmaba, “Afiliación Fondo de Pensiones Obligatorias”, debido a sus bajos conocimientos educativos y al nivel de pensamiento concreto a que se refirió el diagnóstico psicológico.

La Sala considera procedente la presente acción de tutela con base en las siguientes consideraciones: el ciudadano Luis Ernesto Hernández tiene 63 años de edad, es campesino, dedicado a las labores agrícolas desde los 8 años; cuenta con muy bajo grado de escolaridad y no sabe leer ni escribir. Está a cargo de su señora esposa de 58 años, carente de ingresos a quien siempre ha sostenido con su salario y presenta una discapacidad por pérdida de dedos en su mano izquierda. Según el informe psicológico allegado al proceso por su apoderada (Ver hecho 11), “También, durante la entrevista, su relato, lenguaje utilizado, comportamiento y actitudes, sugieren un nivel muy bajo de conocimientos educativos elementales, manejando un pensamiento concreto lo que sugiere un bajo nivel cognitivo, por la cual sería importante evaluar su verdadero coeficiente intelectual”.

En presencia de lo señalado es claro que no puede la Corte Suprema establecer una regla general y con ello presumir una responsabilidad objetiva para todos los casos de personas que se han afiliado al Régimen de Ahorro Individual y que después, persiguen volver al Régimen de Prima Media.

Sin embargo, la Corte Suprema desconoce el contenido y validez del documento exigido por la ley para el momento histórico y exige al fondo evidencias adicionales no estipuladas para la fecha del traslado.

Contrario sensu, en cuanto al demandante, basta con su simple manifestación respecto a la insuficiencia de la información suministrada por el fondo, sin realizar un análisis mínimo respecto a la condición académica, social y cultural del individuo que permita soportar su veracidad.

El retorno en cualquier tiempo al RPM, faltando menos de 10 años para la edad de pensión debe realizarse atendiendo: (i) las expectativas pensionales del afiliado y (ii) la sostenibilidad financiera.

En la Sentencia C-596 de 1997 la Corte Constitucional estudió una demanda dirigida contra la expresión “al cual se encuentran afiliados” contenida en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la cual se acusó de desconocer el principio de favorabilidad en materia laboral, colocar en situación desventajosa a las personas que se encontraban en el régimen de transición y violar el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales, al respecto la Corte expresó:

“Justamente por cuanto **los derechos a la seguridad social no se tienen por el simple hecho de ser persona humana, como si sucede con los derechos fundamentales o**

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

derechos de primera generación, para ser titular de ellos es necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos que la ley, de manera general, impone para adquirirlos. Cuando, en vigencia de la ley que señala tales requisitos, estos llegan a cumplirse, se habla de derecho adquirido en materia de seguridad social. Cuando, por el contrario, durante el término de vigencia de la ley que prescribe tales condiciones, la persona que aspira a la titularidad de ellos está en vía de cumplirlas, se habla de expectativa de derecho. (...) Las consecuencias jurídicas en uno y otro supuesto son bien distintas: los derechos adquiridos, al tenor del artículo 58 la Carta Política, no pueden ser desconocidos por leyes posteriores; no así las simples expectativas de derecho. (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Posteriormente, a través de la providencia C-789 de 2002, la Corte Constitucional resolvió la demanda presentada por un ciudadano contra los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En la sentencia, la Corte precisó el alcance de derechos adquiridos y meras expectativas en materia pensional, indicando lo siguiente:

“La Sala Plena consideró que las disposiciones demandadas se ajustaban a la Constitución puesto que, en primer lugar, el derecho a obtener una pensión de acuerdo con el régimen de transición no es un derecho adquirido sino “apenas una expectativa legítima, a la cual decidieron renunciar voluntaria y autónomamente, para trasladarse al sistema de ahorro individual con solidaridad”.

En segundo lugar, indicó que ni siquiera puede afirmarse que las normas acusadas frustren tal expectativa ya que sólo “se podría hablar de una frustración de la expectativa a pensionarse en determinadas condiciones y de un desconocimiento del trabajo de quienes se trasladaron al sistema de ahorro individual, si la condición no se hubiera impuesto en la Ley 100 de 1993, sino en un tránsito legislativo posterior, y tales personas se hubieran trasladado antes del tránsito legislativo”.

Por último, precisó que “la protección constitucional a favor del trabajador, que le impide al legislador expedir normas que les permitan renunciar a ciertos beneficios considerados como mínimos no se refiere a las expectativas legítimas, sino a aquellos derechos que hayan sido adquiridos por sus titulares o a aquellas situaciones que se hayan consolidado definitivamente en cabeza de sus titulares”, razón por la cual tal prohibición no aplica en este caso al tratarse de expectativas legítimas y no de derechos adquiridos”.

Adicionalmente, las sentencias C-1024 de 2004, y SU-062 de 2010, de la Corte Constitucional en materia de traslados, indican que nadie puede resultar subsidiado a costa de los recursos ahorrados de manera obligatoria por los otros afiliados a este esquema, dado que el régimen solidario de prima media con prestación definida se descapitalizaría.

Así mismo, dentro de la aludida jurisprudencia la Corte recordó que “el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley, no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al establecimiento de una diversidad de trato”.

Como se observa, la Corte Constitucional destacó que el derecho a trasladarse NO es absoluto y debe atender criterios de sostenibilidad financiera y expectativas pensionales. Desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones - Art. 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005.

En desarrollo de los fines esenciales del Estado Colombiano, las instituciones que lo conforman deben propender hacia la salvaguarda de los principios y valores

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

constitucionales conforme a lo dispuesto en la Carta Política, la Ley y los Convenios Internacionales suscritos por aquel.

El Artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, señala:

“El Estado garantizará los derechos, ***la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional***, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.”
(Cursiva, Negrilla y Subrayado fuera del texto original)

Por consiguiente, el artículo 48 de la Constitución Política, estableció dos dimensiones de la seguridad social; por un lado, la concibió como un derecho constitucional fundamental; y, por el otro, como un servicio público de carácter obligatorio el cual se debe prestar bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en aras a la materialización de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, entre otros.

El artículo 334 de la Constitución Política, señala que “La sostenibilidad fiscal debe orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”, en ese orden de ideas, es necesario que, dando prevalencia al interés general sobre el particular, se tomen las medidas pertinentes en búsqueda de la protección de los recursos que soportan el sistema pensional, conforme a los principios que rigen la Constitución Política, en la medida que el derecho a la seguridad social se encuentra atado al principio de sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera del Estado.

En consecuencia, la declaración injustificada de ineficacia del traslado de un afiliado del RPM a RAIS afecta la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados.

Así lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia T-489 de 2010 donde señaló:

Existe plena libertad para que los afiliados se inscriban en cualquiera de los dos regímenes y para trasladarse del uno al otro. La única restricción acatada por la jurisprudencia constitucional, que se desprende del artículo 48 de la Constitución Nacional en el cual está sólidamente afincada, obliga al Estado a “garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional”. En virtud de esta disposición se explica la presencia de los incisos 4º y 5º del artículo 36 cuando establecen como excepción que: “Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, **no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen. Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida. Restricción que, como se vio, persigue evitar el detrimento económico a que, en particular, se ve sujeto el régimen de prima media. En este contexto económico financiero la Sala rescata y apoya las medidas de orden legal avaladas por la Corte Constitucional para garantizar la solidez financiera del sistema pensional como son: El cumplimiento en un 75% de las cotizaciones, hasta completar los 15 años. La posibilidad de retornar al régimen de Prima Media con Prestación Definida, pero con la obligación de llevar a él la totalidad del ahorro realizado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), sin que este**

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

ahorro sea inferior al que se hubiera alcanzado al permanecer en el de Prima Media con Prestación Definida. La prohibición de cambiarse de régimen para personas a quienes les falten diez (10) años o menos para alcanzar la edad de pensión de vejez. La obligación de permanecer en el régimen que se escoja, durante cinco (5) años y no tres (3), como lo autorizaba el artículo 13 de la Ley 100, antes de cambiarse de régimen, por una sola vez. (Ley 797-03, art. 2º).

(...)

Además, en estas condiciones por razones de equidad, para que no se beneficie de un fondo constituido por aportes de otras personas, y al cual ella misma no ha aportado la totalidad de las cotizaciones requeridas, entonces, se le negará su traslado al mismo. Pero especialmente se encuentra esta Sala de la Corte ante las serias motivaciones establecidas por la jurisprudencia constitucional (sentencias C-1024-04 y C-789-02), asentadas sobre la sólida base del inciso 7º del artículo 48 de la Carta Suprema donde se ordena al Estado “garantizar...la sostenibilidad financiera del sistema pensional...”. Motivaciones que se verían afectadas, si se concediera a la actora, contrariando elementales criterios de equidad, su traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS - al de Prima Media con Prestación Definida.” (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

En Sentencia de unificación SU 130/13, la Corte se ocupó del tratamiento dado por la jurisprudencia constitucional a la problemática que surge en torno a quienes se trasladaron al régimen de ahorro individual y unificó su jurisprudencia advirtiendo que, de conformidad con lo previsto en los artículos 13, literal e) y 36, incisos 4º y 5º de la Ley 100 de 1993, tal y como fueron interpretados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, únicamente los afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados a 1º de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, conservando los beneficios del régimen de transición.

En esta misma línea se pronuncia la Corte Constitucional en sentencia T- 489 de 2010, al expresar:

(...) la Sala se permite destacar dos ideas, relacionadas ambas con la sostenibilidad económica del sistema pensional. Ellas son: a-- La primera tiene que ver con la protección del capital pensional. No se puede permitir “la descapitalización del fondo”, si personas que no contribuyeron a su formación, vienen a último momento, cuando les faltan ya menos de 10 años para concretar su pensión de vejez, a beneficiarse de un ahorro comunitario accediendo a una pensión, cuyo pago desfinancia el sistema.

En segundo término, desde una perspectiva social se contraría la equidad y se abandona el valor de la justicia material, al permitir a personas que no han contribuido a los rendimientos de los fondos pensionales, entren a beneficiarse y a subsidiarse a costa de las cotizaciones y los riesgos asumidos por otras y no por ellas mismas” (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Debe resaltarse la importancia que en este tema concede la Corte Constitucional a las consecuencias económicas de las diferentes posiciones sobre la sostenibilidad financiera del Sistema.

Así las cosas el principio de sostenibilidad financiera representa la garantía del derecho fundamental a la pensión de los Colombianos de manera sostenida e indefinida y la posición asumida por la Corte en los fallos relacionados con nulidad o inexistencia del

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

traslado entre regímenes pensionales, quebranta el principio de sostenibilidad financiera, en tanto genera una situación caótica que desvertebra la debida planeación en la asignación y distribución de los recursos del Sistema Pensional, al desconocer la irreductible necesidad de que dichas condenas se cumplan previa la ordenada gestión de los recursos que en la mayoría de los casos no están presupuestados en la medida en que surgen, de manera contingente de la declaración judicial respectiva.

La estabilidad financiera se garantiza en la medida en que el sistema general de pensiones percibe y mantiene, a través de medios jurídicos y financieros, los fondos económicos adecuados que le permitan pagar mes a mes a una mayor cantidad de pensionados y obtener un ahorro para precaver la satisfacción de las pensiones futuras, bajo la permanente orientación de subsanar con urgencia cualquier desventaja contra el bienestar general.

PROCEDENCIA DE LA FIGURA DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN LABORAL.

El fenómeno extintivo de la prescripción se encuentra regulado expresamente en los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 488 del Código Sustantivo del Trabajo, estableciendo un término trienal para el efecto, así:

“ARTICULO 151. PRESCRIPCIÓN. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible...”

“PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES ARTICULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.”

En tal sentido, la prescripción radica en la tardanza en el ejercicio de la acción durante el lapso consagrado en las leyes para tal efecto, lo que hace presumir el abandono del derecho, cuyo efecto no es otro que la improductividad de la acción tendiente a reclamar el derecho.

La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en la sentencia SL 8544-2016, señaló respecto a la imprescriptibilidad lo siguiente:

“Por lo demás, esta visión del salario y su papel en la consolidación de la pensión, empalma perfectamente con el pensamiento de la Sala en el sentido que los elementos consustanciales a la prestación pensional no prescriben y, por este motivo, pueden ser revisados judicialmente en cualquier momento. Así, se ha dicho jurisprudencialmente que aspectos tales como el porcentaje de la pensión, los topes máximos pensionales, los linderos temporales para determinar el IBL y la actualización de la pensión, no se extinguen por el paso del tiempo, pues constituyen aspectos ínsitos al derecho pensional (CSJ SL, 19 may. 2005, rad. 23120; C.S.J SL, 5 dic. 2006, rad. 28552; C.S.J SL, 22 ene. 2013, rad. 40993; C.S.J SL 6154-2015)”.

Tesis que en criterio de Colpensiones no tiene relación con el caso en debate, pues el problema jurídico que lo originó se relaciona con el acto de afiliación o traslado entre regímenes pensionales, que no es un aspecto consustancial a la prestación pensional y por lo mismo, no goza del carácter de imprescriptible.

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

En relación a este tema, el Magistrado Jorge Luis Quiroz dentro de la aclaración de voto, ya referenciada indicó:

“En cuanto a la prescripción de las acciones, considero importante refrendar la diferencia del derecho pensional y el predicado de su imprescriptibilidad, para recordar que el estatus de pensionado se adquiere por mandato de la ley en el momento en que se cumplen los requisitos previstos en ella, condición que el beneficiario solo pierde con la muerte, hecho que a su vez habilita el traslado del derecho a los beneficiarios. Ese estatus de pensionado es el que hace predicable la imprescriptibilidad del derecho. En lo que se refiere al momento en que el interesado reclama la pensión, como reiteradamente lo ha dicho esta Sala, sí opera el fenómeno prescriptivo frente a las mesadas pensionales, aplicando los términos previstos en los artículos 488 del C.S.T. y 151 del C.P.L.

El fenómeno de la prescripción, como lo ha resaltado esta Sala, es asunto medular en un Estado de derecho, en la medida en que determina la seguridad jurídica de los actos y los contratos permitiendo a los celebrantes liberarse definitivamente de sus obligaciones, haciendo que cobren firmeza sus expresiones de voluntad, convirtiendo el fenómeno prescriptivo en una figura de orden público, lo que hace que la regulación de los términos para su ocurrencia tengan origen legal, de manera que sería excepcional que la fijación de un término prescriptivo tuviera origen en una interpretación judicial.

Bastaría preguntarse qué seguridad jurídica tendría el ciudadano, al que se le impone que su acreedor tiene acciones imprescriptibles y que luego de satisfecha la obligación, en cualquier momento de la vida en que a éste se le ocurra, pueda cuestionar la forma en que se satisfizo la obligación.

El escenario de las obligaciones pensionales no tiene porqué sustraerse a esa regla de oro, por el contrario, en aras de cumplir el mandato constitucional de su sostenibilidad financiera, impone que en algún momento el reconocimiento de los derechos pensionales, adquieran firmeza y ofrezcan certeza al deudor de que su obligación está satisfecha, sobre todo cuando de por medio está un interés superior y colectivo, representado en el cumplimiento del principio antes enunciado, que se constituye en un factor que permite los fines de la seguridad social y los nobles objetivos de cobertura y mejoramiento de las condiciones de quienes salen del mercado laboral por su edad, ya que de nada serviría su implementación en el papel, sin una fuente que permita su sostenibilidad económica.

Estas razones, también serán determinantes al momento de definir pretensiones de nulidad de traslado, pues habrá de tenerse en cuenta de qué forma se afectan los plazos previstos por el legislador y en cada caso en particular, si operó o no la prescripción y desde que momento debe contarse”.

Conforme lo explicado, no resulta consecuente que los afiliados al sistema general de pensiones puedan solicitar en cualquier tiempo, que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales.

Un ejemplo claro de esta situación son los pensionados en el RAIS para quienes el derecho ya adquirió firmeza.

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE EN CUANTO AL PRECEDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RESPECTO DEL ARTÍCULO 1604 DEL CÓDIGO CIVIL

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

La Corte Suprema de Justicia ha establecido que, en materia de procedimiento laboral, la parte demandante tiene la carga de probar la culpa o negligencia del empleador, así lo expreso en sentencia SL 2799- 2014:

«En efecto, en primer lugar, esta Sala de la Corte ha dicho insistentemente que "...la parte demandante tiene la carga de probar la culpa o negligencia del empleador que da origen a la indemnización contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, además de que el empleador puede desligarse de ella demostrando diligencia y cuidado en realización del trabajo..."

En consecuencia, para beneficiarse el trabajador de los efectos del artículo 1604 del Código Civil, primero debe probarse el incumplimiento. Una vez surtida esta carga, podrá posteriormente, trasladar al empleador la carga de probar que sí actuó con la diligencia y cuidado para exonerarse de la responsabilidad. Agrega la Corte que en este tipo de «...culpa por abstención...», el trabajador no queda relevado totalmente de sus cargas probatorias”

En igual dirección, en la sentencia CSJ SL 4350-2015, la Sala precisó:

La censura se duele de que, según su decir, el ad quem no aplicó el artículo 1604 del CC que establece que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe a quien ha debido emplearla, esto es a la empresa; reproche jurídico que no se aviene a la situación del sublite, puesto que, para beneficiarse el trabajador de los efectos de esta norma del Código Civil, primero él debe probar el incumplimiento de parte del empleador de su deber de protección y seguridad del trabajador, en cuyo evento le traslada a aquel la carga de probar que sí actuó con diligencia y cuidado para exonerarse de la responsabilidad por la culpa leve que aplica en asuntos laborales como el presente.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, se repite, el Tribunal no incurrió en error jurídico alguno, al concluir que aún en los eventos en los que se plantea una «...culpa por abstención...», el trabajador no queda relevado totalmente de sus cargas probatorias, pues «...es su deber demostrar el incumplimiento patronal y el nexo de causalidad del mismo con la ocurrencia del accidente.»

La misma corporación en la sentencia CSJ SL, 2005, rad. 23656, señaló:

“Lo anterior no implica, no obstante, como lo plantea la censura, que le baste al trabajador plantear el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección, para desligarse de cualquier carga probatoria, porque, como lo dijo el Tribunal y lo ha precisado la Sala, teniendo en cuenta que no se trata de una especie de responsabilidad objetiva como la del sistema de riesgos laborales, para que opere la inversión de la carga de la prueba que se reclama, primero deben estar demostradas las circunstancias concretas en las que ocurrió el accidente y “...que la causa eficiente del infortunio fue la falta de previsión por parte de la persona encargada de prevenir cualquier accidente...” (CSJ SL, 10 mar. 2005, rad. 23656.).

Por consiguiente, la Corte desconoció su propio precedente en el que establece que en materia laboral no basta con que el trabajador plantee el incumplimiento de las obligaciones a cargo del empleador, para que opere la inversión de la prueba, deben estar probadas las circunstancias del hecho.

RESPECTO DEL COMPORTAMIENTO DEL AFILIADO EN EL SISTEMA

La Corte también ha indicado que existen ciertos comportamientos y actividades que demuestran el compromiso de un afiliado de permanecer en un régimen pensional.

Al respecto en la sentencia SL 413-2018, expresó:

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

N.I.T No. 901.761.709-8

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

“Desde luego que, para la tesis que ahora sostiene la Sala, la presencia o no de cotizaciones consistente con el formato de vinculación no es la única expresión de esa voluntad, pueden existir otras, tales como las solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves, por mencionar algunos actos de relacionamiento con la entidad que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella. Lo importante es que exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del deseo del trabajador de pertenecer a un régimen pensional determinado”.

Este aspecto no fue analizado en la providencia demandada, existiendo elementos notorios que exponían la intención del demandante de trasladarse al RAIS, como fue el hecho de permanecer más de 9 años afiliado al mismo; afiliación tácita.

En cuanto al precedente de la Corte Constitucional

Dentro del fallo demandado, la Corte Suprema de Justicia desconoció decisiones proferidas por la Corte Constitucional en sede abstracta de constitucionalidad, que generan precedente vinculante para todos los operadores judiciales, incluso si estos son órganos de cierre de su jurisdicción, estas providencias son:

Sentencia C 086 de 2016

En esta providencia la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 167 del C.G.P en relación a la carga dinámica de la prueba, precisando que esta figura jurídica puede ser aplicada por el juez, luego de examinar las particularidades de cada caso, sin invertir la lógica probatoria prevista por el Legislador ni alterar las reglas generales en lo concerniente a la distribución de la carga de la prueba, dentro del fallo señaló la Corte:

“7.4.- En lo concerniente a la configuración de la carga dinámica de la prueba debe decirse que atiende su inspiración teórica, fundada en los pilares de solidaridad, equidad (igualdad real entre las partes), lealtad y buena fe procesal, todos ellos reconocidos en la Carta Política de 1991, donde el principio “quien alega debe probar” cede su lugar al principio “quien puede debe probar”. Su ejercicio por parte del juez es, en consecuencia, manifestación de una competencia plenamente legítima bajo el prisma de un Estado Social de Derecho.

En la regulación aprobada por el Legislador este decidió -también de manera deliberada y consciente- no fijar un catálogo cerrado de episodios en las cuales puede tener cabida la carga dinámica de la prueba. Por el contrario, dejó abierta esa posibilidad al juez, “según las particularidades del caso”, para lo cual mencionó solo algunas hipótesis: (i) la posesión de la prueba en una de las partes, (ii) la existencia de circunstancias técnicas especiales, (iii) la previa y directa intervención en los hechos, (iv) el estado de indefensión o de incapacidad de una de las partes, “entre otras circunstancias similares”.

Los eventos mencionados recogen en buena medida las reglas trazadas por la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la propia Corte Constitucional. Sin embargo, el Legislador facultó a los jueces para evaluar las circunstancias de cada caso y definir si se dan o no los supuestos genéricos para recurrir en ciertos casos a la carga dinámica de la prueba. Esta decisión resulta comprensible y completamente válida, no solo ante la dificultad para anticiparse a nuevas situaciones en una sociedad que presenta vertiginosos cambios -algunos tal vez inimaginables-, sino porque son los contornos de cada situación los que permiten evaluar si la igualdad entre las partes se ha visto o no comprometida y se requiere de la “longa manus” del juez para restablecerla.

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

De esta manera, para la Corte es claro que en algunos casos el decreto oficioso de pruebas o la distribución de su carga probatoria dejan de ser una potestad del juez y se erige en un verdadero deber funcional. No obstante, ello debe ser examinado de acuerdo con las particularidades de cada caso, sin invertir la lógica probatoria prevista por el Legislador ni alterar las reglas generales en lo concerniente a la distribución de la carga de la prueba. De hecho, para tal fin también se han diseñado diversos recursos y mecanismos de control al interior de cada proceso, e incluso excepcionalmente podrá hacerse uso de mecanismos extraordinarios como la acción de tutela, lo cual ha sido avalado en numerosas ocasiones por la jurisprudencia constitucional [\[114\]](#)”.

POR CONSIGUIENTE, LA CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA ES UNA EXCEPCIÓN Y NO UNA GENERALIDAD, cuya aplicación está supeditada al análisis de las particularidades del caso por parte del juez, aspectos que fueron desconocidos en el caso sub lite, en la medida que la Corte invirtió la carga de la prueba en cabeza del fondo, atendiendo a la simple manifestación del demandante y sin realizar el menor análisis en relación a las circunstancias específicas en que se surtió el traslado de régimen.

Sentencia C 993 de 2006.

En esta sentencia la Corte analizó la Constitucionalidad de los artículos 1509, 1510 (parcial) y 1511 (parcial) del Código Civil, estableciendo lo siguiente:

“Esta corporación ha manifestado en múltiples ocasiones que el legislador goza de potestad de configuración normativa, en ejercicio de la competencia general para hacer, interpretar, reformar y derogar las leyes, que le atribuyen los Arts. 114 y 150 superiores, siempre y cuando respete los límites representados por los valores, principios y derechos consagrados en la misma Constitución y por el principio de razonabilidad. En el asunto que se examina, la previsión del error de hecho como vicio del consentimiento en la celebración de los negocios jurídicos, y la exclusión, con tal carácter, del error de derecho, es una expresión del ejercicio de dicha potestad de configuración normativa que respeta los mencionados límites, en particular los principios de autonomía de la voluntad privada y de igualdad invocados en los cargos de la demanda. En desarrollo del principio de seguridad jurídica, el ordenamiento civil colombiano adoptó el principio general del Derecho Romano según el cual la ignorancia del Derecho no sirve de excusa (iuris ignorantia non excusat), con la consecuencia de que el error de derecho perjudica (iuris error nocet). Así lo estableció en el Art. 9º del Código Civil, en virtud del cual “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa” y en el Art. 1509 ibidem, una de las normas objeto de la demanda que se estudia, que dispone que “el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento”. Esto último significa que el error de derecho no da lugar a la declaración judicial de nulidad del negocio jurídico y que, por tanto, la parte de éste que lo cometió debe asumir todas las consecuencias de su celebración.

(...)

Las normas acusadas no vulneran el principio de la autonomía de la voluntad privada, puesto que la ausencia de reconocimiento del error de derecho como vicio del consentimiento no priva a las personas de la facultad de celebrar negocios jurídicos y de definir las condiciones y términos de los mismos, con efecto vinculante, para alcanzar los fines de aquella, siempre y cuando respeten las normas imperativas y el orden público. Sin embargo, puede advertirse que, como es lógico, dicha circunstancia exige lógicamente una mayor carga de claridad y diligencia de las partes del negocio en su celebración, para evitar las consecuencias adversas del negocio celebrado con ese tipo de vicio.

(...)

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

La Corte Constitucional ha expuesto numerosas veces que desde su origen histórico el principio de igualdad implica un trato igual para quienes se encuentran en situaciones iguales, y un trato desigual para quienes se encuentran en situaciones desiguales. En consecuencia, si se plantea que se viola dicho principio porque a,

En el presente caso la Corte Suprema desconoció el precedente constitucional al valerse de la presunta ignorancia de la ley del afiliado para considerarlo lego o inexperto. El error de derecho no es justificable en los negocios jurídicos menos para buscar un aprovechamiento pensional.

Sentencias C 1024 de 2004, C 625 de 2007 y SU-062 de 2010 y C 789 de 2002

La providencia objeto de la presente acción desconoció sentencias de la Corte Constitucional en materia de traslado, como las C 1024 de 2004 y C 625 de 2007, entre otras, donde indicó el máximo tribunal que nadie puede resultar subsidiado a costa de los recursos ahorrados de manera obligatoria por los otros afiliados a este esquema dado que el período de permanencia obligatoria contribuye al logro de los principios de universalidad y eficiencia y asegura la intangibilidad y sostenibilidad del sistema al preservar los recursos dispuestos para garantizar el pago futuro de mesadas y el reajuste periódico de las mismas. Según la Corte, el fondo del régimen solidario de prima media con prestación definida se descapitalizaría.

Así, respecto al derecho a la libre elección entre regímenes pensionales y los límites para hacer efectivo el derecho, la Sentencia C-1024 de 2004, expresó:

9.2.3.2. Al resolver sobre el citado problema jurídico, en la Sentencia C-1024 de 2004, la Corte concluyó que el artículo 2° de la Ley 797 de 2003 era exigible, en consideración a que el período de carencia o de permanencia obligatoria allí previsto, conduce a la obtención de un beneficio directo en favor de los sujetos a quienes se les aplica, pues además de contribuir al logro de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia, asegura la intangibilidad y sostenibilidad del sistema pensional, preservando los recursos económicos que han de garantizar el pago futuro de las pensiones y el reajuste periódico de las mismas.

9.2.3.3. De manera puntual, en la aludida providencia la Corte recordó que “el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley, no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al establecimiento de una diversidad de trato entre sujetos puestos aparentemente en igualdad de condiciones, tales como, el señalamiento de límites para hacer efectivo el derecho legal de traslado entre regímenes pensionales. Ahora bien, la Corte ha sostenido que dicha diversidad de trato no puede considerarse per se contraria al Texto Superior, pues es indispensable demostrar la irrazonabilidad del tratamiento diferente y, más concretamente, la falta de adecuación, necesidad y proporcionalidad de la medida en el logro de un fin constitucionalmente admisible”.

9.2.3.4. Desde esta perspectiva, explicó que “el objetivo perseguido con el señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes”.(...)

Como se observa, la Corte Constitucional destacó que el derecho a trasladarse NO es absoluto y debe atender criterios de sostenibilidad financiera y expectativas pensionales.

Ahora bien, no solo la jurisprudencia nacional ha destacado el deber Estatal de protección al derecho a la seguridad social, desde la perspectiva del principio de sostenibilidad fiscal y de estabilidad financiera, sin que ello implique su regresividad, con miras a mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos y fortalecer el sistema, pues, sobre el punto resulta pertinente recordar la providencia No 12.670 del 27 de marzo de 2009 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos humanos, sobre el caso de la Asociación Nacional de ex servidores del Instituto Peruano de la Seguridad Social y otras contra Perú, respecto de las pensiones excesivamente altas en comparación con la situación de los demás pensionados, donde indicó lo siguiente:

“106. Tal como se deriva del texto mismo del artículo 21 de la Convención Americana, el derecho a la propiedad no es absoluto pues su uso y goce puede ser subordinado al interés social. La Corte Interamericana ha señalado que el derecho a la propiedad debe ser entendido dentro del contexto de una sociedad democrática donde para la prevalencia del bien común y los derechos colectivos deben existir medidas proporcionales que garanticen los derechos individuales^[30]. En palabras de la Corte, “la función social de la propiedad es un elemento fundamental para el funcionamiento de la misma, y es por ello que el Estado, a fin de garantizar otros derechos fundamentales de vital relevancia para una sociedad específica, puede limitar o restringir el derecho a la propiedad privada, respetando siempre los supuestos contenidos en la norma del artículo 21 de la Convención, y los principios generales del derecho internacional”^[31].

107. Sobre el concepto de interés social consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana, la Corte ha señalado que “comprende todos aquellos bienes que por el uso a que serán destinados, permitan el mejor desarrollo de una sociedad democrática. Para tal efecto, los Estados deberán emplear todos los medios a su alcance para afectar en menor medida otros derechos, y por tanto asumir las obligaciones que esto conlleve de acuerdo a la Convención”^[32].

108. Específicamente, en el caso Cinco Pensionistas, la Corte reiteró que los Estados pueden poner limitaciones al goce del derecho de propiedad por razones de utilidad pública o interés social y señaló que en el caso de los efectos patrimoniales de las pensiones (monto de las pensiones), los Estados pueden reducirlos únicamente por la vía legal adecuada y por los motivos ya indicados^[33]”

En la Sentencia SU-062 de 2010 la Corte destacó:

“Por lo anterior, resulta imperativo ajustar la jurisprudencia constitucional a la normatividad vigente y reiterar lo indicado por esta corporación en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004”.

En concordancia con lo dicho, y aun cuando el punto no era la materia propia de decisión, la citada sentencia de unificación también retomó el tema referente a la posibilidad de retornar en “cualquier tiempo” al régimen de prima media con el fin de pensionarse de acuerdo con las normas anteriores a la Ley 100/93, destacando que tal retorno no opera para todos los sujetos del régimen de transición indistintamente, sino para una categoría de ellos, es decir, para quienes a 1° de abril de 1994 contaban con 15 años o más de servicios cotizados. Bajo este criterio, se acoge nuevamente lo expuesto en las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, en las que se interpretó el alcance de los artículos 13 y 36 de la Ley 100/93.”

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

En consecuencia, de conformidad con la ley y la jurisprudencia Constitucional solo quienes tienen 15 años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, con el fin de hacer efectivos los beneficios del régimen de transición. Para tal efecto, deberán trasladar a éste todo el ahorro que hayan efectuado al régimen de ahorro individual, el cual no podrá ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media.

De esta forma la Corte Constitucional solo ha permitido el traslado en cualquier tiempo en los eventos que un afiliado que inicialmente pertenecía al RPM, se afilia al RAIS y desea volver al primero. Podrá hacerlo siempre y cuando conserve el régimen de transición y adicionalmente acredite 15 años de cotización al 1 de abril de 1994.

Sobre la Sentencia C-789 de 2002¹¹, la Corte expresa:

“9.1.7. Bajo esas premisas, se reitera, encontró justificado la Corte que el legislador, a través de los incisos 4° y 5° del artículo 36 de la Ley 100/93, solo haya decidido excluir del régimen de transición a sus beneficiarios por edad, cuando éstos tomen la decisión de cambiarse del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad. Acorde con esa lectura, puntualizó la Corte que únicamente quienes cumplan con el requisito de tiempo de servicio, no pierden los beneficios del régimen de transición por el hecho de trasladarse de régimen pensional.

(...)

9.2. La Ley 797 de 2003 y sus efectos

9.2.2.1. Dentro del propósito de darle mayor estabilidad y sostenibilidad al sistema pensional, con posterioridad a la Sentencia C-789 de 2002, el Congreso de la República expidió la Ley 797 de 2003, “por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.

9.2.2.2. En lo que interesa a la presente causa, el artículo 2° del citado ordenamiento modificó el literal e) del artículo 13 de Ley 100/93, norma que se ocupa de las características del S.G.P. Dentro de ese contexto, el referido literal

e) regula lo relacionado con el traslado de régimen pensional y, en su versión original, establecía que los afiliados al S.G.P solo podían trasladarse de régimen por una sola vez cada tres (3) años, contados a partir de la selección inicial. Precisamente, en procura de un mayor nivel de estabilidad y sostenibilidad del sistema, con la modificación introducida por la Ley 797 de 2003, se extendió el término de traslado de tres (3) a cinco (5) años y, adicionalmente, se fijó un límite para el ejercicio de tal prerrogativa, en el sentido de que no podrán trasladarse de régimen quienes les falte diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. Con el fin de que las personas que para ese momento se encontraban dentro de la hipótesis normativa, no se vieran sorprendidas con la nueva regulación, el legislador estableció una medida de transición o período de gracia, consistente en permitirle a todos los afiliados, en el término de un (1) año, contado a partir de la entrada en vigencia de la ley, trasladarse de régimen en cualquier tiempo.”

Sentencias C 258 de 2013 y SU 230 de 2015

La Corte Suprema desconoció sentencias como la C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, en cuanto a la sostenibilidad financiera del sistema pensional y las relativas a que el derecho pensional NO es absoluto y debe compadecerse con el interés público.

UNIÓN TEMPORAL
REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

En primer término, distingue el método de financiación de los dos sistemas:

“5.15. A manera de conclusión, puede afirmarse que el sistema general de pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, y en las correspondientes disposiciones que la modifican o adicionan, se estructura y organiza bajo dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten: (i) el régimen de prima media con prestación definida y (ii) el régimen de ahorro individual con solidaridad, cada uno de los cuales presenta particulares características. El primero de ellos, hace referencia al sistema de financiación de pensiones administrado por el I.S.S, en el que los aportes de cada afiliado integran un fondo común con el cual se financian todas las pensiones. En este régimen el derecho a la pensión se obtiene únicamente cuando el afiliado cumple los requisitos de edad y tiempo de cotizaciones previsto en la ley. El segundo, a diferencia del anterior, corresponde a un sistema en el que las pensiones se financian a través de una cuenta de ahorro individual, administrada por la AFP a la cual se encuentre afiliado el usuario, y el derecho a dicha prestación se obtiene con base en el capital depositado en la respectiva cuenta, sin que para ello sea exigible el requisito de edad o determinado número de semanas de cotización. Cabe destacar que, hecha la selección inicial a cualquiera de estos regímenes, los afiliados tienen la posibilidad de trasladarse de uno a otro, en los términos del literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003.”

Sobre la problemática relacionada con el traslado de régimen pensional la Corte expresa:

“8.1. Retomando lo expuesto en el numeral 7.2 de esta sentencia, en el caso de los beneficiarios del régimen de transición por cumplir el requisito de edad, la escogencia del régimen de ahorro individual o el traslado que hagan al mismo, trae como consecuencia inexorable la pérdida del régimen de transición.

8.2. El evento en el cual el trabajador decide acogerse definitivamente al régimen de ahorro individual no presenta mayores implicaciones, pues resulta apenas lógico que si un sujeto del régimen de transición, voluntariamente, decide que su pensión se rija no por los requisitos legales de edad y semanas de cotización, sino de acuerdo al capital acumulado en una cuenta individual, le sea aplicable forzosamente las disposiciones de la Ley 100/93.

8.3. Sin embargo, no sucede lo mismo en el segundo evento, es decir, cuando el trabajador decide trasladarse al régimen de prima media luego de haber escogido al régimen de ahorro individual, pues en este caso, tal decisión tiene importantes repercusiones en las aspiraciones pensionales de estos trabajadores, pues, como se dijo anteriormente, ello acarrea la pérdida del régimen de transición. Desde esa perspectiva, el traslado deja de ser un asunto de simple connotación legal y adquiere una indudable relevancia constitucional, por comprometer derechos fundamentales como la seguridad social y el mínimo vital.”

INDEBIDA APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN MATERIA DE ASESORÍA DE TRASLADO PENSIONAL.

Se ha evidenciado que, en los fallos relacionados con la nulidad o ineficacia de traslado entre regímenes pensionales, se censura que la administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad - RAIS, no proporcionó al afiliado una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las implicaciones del traslado, desconociendo que el deber de información que tienen las administradoras de pensiones, ha tenido varias etapas:

1) Primera Etapa: el Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, estableció en el numeral 1. del artículo 97, la obligación de las entidades de “suministrar

N.I.T No. 901.761.709-8

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado”.

2) Segunda etapa: La ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010, reglamentaron los derechos de los consumidores (precisando los principios y el contenido básico de la información) y establecieron el deber de asesoría y buen consejo a cargo de las administradoras de pensiones.

3) Tercera etapa: la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular Externa N.º 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera, establecieron que los usuarios del sistema pensional tienen el derecho a la doble asesoría, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes, esto es, a obtener información de asesores y promotores de ambos regímenes, con el fin de que se formen un juicio imparcial y objetivo sobre las características, fortalezas y debilidades de cada uno, así como de las condiciones y efectos jurídicos del traslado.

Así las cosas, el análisis de la información suministrada por la AFP y el alcance de la asesoría que debió brindar al momento de la afiliación, deben ser valoradas bajo la normatividad vigente para la fecha de suscripción del formulario o de la materialización del traslado.

No es razonable ni jurídicamente válido imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado de régimen, pues tal exigencia desvirtúa el principio de confianza legítima, teniendo en cuenta que el principio de legalidad y el debido proceso, no consisten solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se juzga.

El juzgamiento de la conducta de los fondos con base en normas inexistentes, no tiene justificación jurídica alguna y viola gravemente el debido proceso de Colpensiones, quien sin haber participado en el trámite de traslado es quien debe afrontar la carga de la prestación.

La carga dinámica de la prueba no puede ser aplicada en forma genérica, sin ninguna ponderación, y en desigualdad de las partes involucradas en un proceso. El artículo 167 de la ley 1564 de 2012, precisa:

ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Así las cosas, la regla general es que corresponde a cada parte probar el supuesto de hecho que exhibe y atendiendo las situaciones particulares del caso, el juez puede invertir la carga de la prueba exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias.

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

N.I.T No. 901.761.709-8

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

En los eventos de traslado de Régimen, la Corte Suprema sin atender las situaciones particulares de cada caso, invierte la carga de la prueba en cabeza del fondo privado y exime al demandante de aportar soporte alguno que demuestre la existencia de un vicio, fuerza o dolo al momento de afiliarse al RAIS, obligando a que toda la carga probatoria recaiga exclusivamente en una de las partes, sin que exista un menor esfuerzo procesal en cabeza del demandante.

La carga dinámica e inversión de la prueba al interior de un proceso judicial exige la igualdad entre las partes con parámetros de buena fe y lealtad procesal. Bajo estas circunstancias el principio “quien alega debe probar” cede su lugar al principio “quien puede debe probar”. Para determinar QUIEN es el que puede probar dentro de un proceso judicial la Corte Constitucional ha señalado que depende de cada situación particular. Así la sentencia C 086 de 2016 que analizó la constitucionalidad del art. 167 del Código General del Proceso, indicó:

“7.4.- En lo concerniente a la configuración de la carga dinámica de la prueba debe decirse que atiende su inspiración teórica, fundada en los pilares de solidaridad, equidad (igualdad real entre las partes), lealtad y buena fe procesal, todos ellos reconocidos en la Carta Política de 1991, donde el principio “quien alega debe probar” cede su lugar al principio “quien puede debe probar”.”

Su ejercicio por parte del juez es, en consecuencia, manifestación de una competencia plenamente legítima bajo el prisma de un Estado Social de Derecho.

En la regulación aprobada por el Legislador este decidió -también de manera deliberada y consciente- no fijar un catálogo cerrado de episodios en las cuales puede tener cabida la carga dinámica de la prueba. Por el contrario, dejó abierta esa posibilidad al juez, “según las particularidades del caso”, para lo cual mencionó solo algunas hipótesis: (i) la posesión de la prueba en una de las partes, (ii) la existencia de circunstancias técnicas especiales, (iii) la previa y directa intervención en los hechos, (iv) el estado de indefensión o de incapacidad de una de las partes, “entre otras circunstancias similares”.

Igualmente destaca la Corte constitucional que los eventos mencionados “recogen en buena medida las reglas trazadas por la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la propia Corte Constitucional”. Además, agrega con nitidez que “el Legislador facultó a los jueces para evaluar las circunstancias de cada caso y definir si se dan o no los supuestos genéricos para recurrir en ciertos casos a la carga dinámica de la prueba. Esta decisión resulta comprensible y completamente válida, no solo ante la dificultad para anticiparse a nuevas situaciones en una sociedad que presenta vertiginosos cambios -algunos tal vez inimaginables-, sino porque son los contornos de cada situación los que permiten evaluar si la igualdad entre las partes se ha visto o no comprometida y se requiere de la “longa manus” del juez para restablecerla.”

Al transpolar lo arriba señalado por la Corte a este tipo de decisiones encontramos lo siguiente:

i) La posesión de la prueba en una de las partes:

Hasta el año 2016, los fondos privados cuentan exclusivamente con el consentimiento vertido en el formulario de afiliación, para probar el conocimiento y asentimiento del afiliado respecto del traslado, por cuanto las leyes que surgieron entre el año 1994 y 2016 no exigían nada diferente al documento de afiliación donde constaba la plena intención de pertenecer al Régimen de ahorro individual con solidaridad.

Imponer cargas adicionales a las previstas en las leyes de la época se constituye en una situación de carácter imposible.

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

N.I.T No. 901.761.709-8

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

Además, como veremos más adelante para que la “voluntad” se vea afectada debe demostrarse la existencia de un vicio o fuerza capaz de anular el acto jurídico. Estos elementos evidentemente solo los puede aportar el demandante.

ii) La existencia de circunstancias técnicas especiales

Es claro que el entendimiento entre el RPM y el RAIS sugiere que los afiliados sean debidamente asesorados dado que hay aspectos técnicos que los diferencian.

Sin embargo, esta regla no puede interpretarse como una situación universal que desplace las situaciones de cada caso particular y que además invierta la carga de la prueba sin mayor análisis que la naturaleza experta que tiene la administradora de pensiones.

Este contexto tampoco puede desconocer escenarios donde la expectativa pensional, la permanencia en el sistema, el silencio, la aceptación en el tiempo, la calidad del demandante y otros relacionados con las actividades financieras que ejecuta un usuario durante su vida laboral, le permitía escoger acertadamente el régimen pensional. Este último aspecto ha sido por ejemplo evaluado por la corte Suprema tratándose de afiliaciones tacitas donde prevalecen las actividades, cotizaciones y movimientos financieros a lo largo de la vida laboral.

iii) La previa y directa intervención en los hechos

Igualmente, si bien existe una intervención de asesoría de la administradora de pensiones que podría generar un vicio en la voluntad del traslado, ello debe demostrarse pues de lo contrario predominarían las conjeturas y suposiciones, y no los hechos debidamente demostrados en el proceso en los que intervino directamente el demandante.

No pueden considerarse a todos los afiliados como una parte débil e indefensa, la misma ley previó distintos deberes en cabeza de los mismos con el fin de que por interés propio se asesoren de la mejor manera. Adicionalmente NO pueden desconocerse las situaciones que rodean cada caso y que de alguna manera le permitían al demandante obtener información mínima durante el paso del tiempo. La Corte Constitucional ha indicado, en este sentido y en diversas providencias que nadie puede alegar su propia culpa a favor:

“Una persona no es digna de ser oída ni menos pretender el reconocimiento de un bien jurídico a partir de su conducta reprochable. Para la Corte, nadie puede presentarse a la justicia para pedir la protección de los derechos bajo la conciencia de que su comportamiento no está conforme al derecho y los fines que persigue la misma norma. Este principio no tiene una formulación explícita en el ordenamiento jurídico. No obstante, lo anterior, la Corte Constitucional ha hecho alusión a su naturaleza de regla general del derecho, al derivarse de la aplicación de la analogía iuris. Por ello, cuando el juez aplica dicha regla, se ha señalado que el mismo no hace otra cosa que actuar con fundamento en la legislación⁴.”

En materia penal la Corte Suprema de Justicia en sentencia SP-12912018 (49680), respecto a las acciones a propio riesgo o ‘autopuestas’ en peligro, indicó que de acuerdo con la teoría de la imputación objetiva, para que un resultado pueda ser atribuido a un agente este ha debido crear o incrementar un riesgo jurídicamente desaprobado que finalmente se concretó en la producción de la consecuencia típica (relación entre infracción al deber de cuidado y resultado), de modo que la autoría no se funda únicamente en criterios causales (relación de causalidad entre acción y resultado)

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

También precisó que si la infracción a ese deber se concreta en el desconocimiento de la norma de cuidado generando riesgos o puesta en peligro de bienes jurídicamente tutelados es preciso establecer el marco en el cual se realizó la conducta e identificar las disposiciones que la gobernaban. Ello con el propósito de develar si mediante la valoración ex ante y ex post el resultado que se produjo puede ser imputado al comportamiento del procesado.

Ahora bien, la parte débil en el caso sub examine debe ser considerada como quien carece de capacidades para ilustrarse y asesorarse de la menor manera y no como una persona per se vulnerable que está imposibilitada de tener un entendimiento mínimo del sistema, incapaz de realizar actividades orientadas a instruirse mejor e incompetente para aportar pruebas que expongan la existencia de un vicio en el consentimiento. La corte Constitucional en tal sentido (sentencia T 422 de 2011) indicó que en materia de traslado la libertad de escoger el régimen pensional debe verse menguada o adolecer de algún vicio en el consentimiento, y solamente cuando los hechos de la controversia permitan dilucidar que la persona era una parte débil debido a su calidad y escasos conocimientos puede procederse con un regreso automático. Así pues, dicha providencia amparó los derechos de un ciudadano campesino analfabeta:

“Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos objeto de esta controversia, la afirmación del actor resulta creíble; en efecto, que los aportes objeto del traslado fueran posteriormente devueltos por parte de Skandia al I.S.S, sin conocimiento ni autorización del actor, es un hecho que no contrasta con el hallazgo de esta Sala, consistente en considerar que para el afiliado era muy difícil comprender las implicaciones del documento que firmaba, “Afiliación Fondo de Pensiones Obligatorias”, debido a sus bajos conocimientos educativos y al nivel de pensamiento concreto a que se refirió el diagnóstico psicológico.

Con fundamento en lo anterior agrega la Corte que en ese caso específico no será necesario examinar si se presentó un vicio del consentimiento o al menos fuerza con capacidad de viciarlo:

Por considerar suficiente la razón anterior, la Sala no encuentra necesario dilucidar si al momento de firmar el formulario de afiliación con la AFP Skandia al régimen de ahorro individual con solidaridad, se presentó algún vicio del consentimiento o al menos fuerza moral que haya podido viciarlo; lo anterior se afirma por la sensación que puede tener un campesino sin mayor preparación académica, al momento de celebrar un contrato de trabajo, de lo que podría ocurrir si no llegara a firmar la documentación que le presentan y por la ausencia de espontaneidad en la suscripción del formulario

Estás advertencias de la Corte indican la necesidad probatoria de establecer la existencia de un vicio, fuerza o dolo al momento de trasladar a un afiliado, de inclusive analizar la calidad del demandante y de analizar cada caso particular según los hechos y circunstancias.

En conclusión, con lo señalado hasta ahora, la carga dinámica de la prueba no puede invertirse de una forma arbitraria y sin considerar los aspectos particulares de cada caso debidamente individualizado, tal y como lo precisó la Corte Constitucional en la citada providencia C 086 de 2016:

Imponer al juez la obligación de acudir en todos los eventos a la institución de la carga dinámica de la prueba, y no de manera ponderada de acuerdo con las particularidades de cada caso y los principios generales de la Ley 1564 de 2012, significaría alterar la lógica probatoria prevista en el estatuto procesal diseñado por el Legislador, para en su

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

lugar prescindir de las cargas procesales razonables que pueden imponerse a las partes y trasladar esa tarea únicamente al juez.

ERRÓNEA INTERPRETACIÓN E INDEBIDA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1604 DEL CÓDIGO CIVIL.

El artículo 1604 El artículo 1604 del Código Civil, señala:

“ARTICULO 1604. <RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR>. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio.

El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido entregado al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa.

La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega.

Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de las estipulaciones expresas de las partes.”

Dentro de los fallos relacionados con traslado de Régimen, la interpretación del artículo 1604 del Código Civil que realiza la Corte hace que la responsabilidad en cabeza de los fondos se convierta en objetiva, toda vez que no exige al demandante aportar soporte alguno que demuestre la existencia de un vicio, fuerza o dolo al momento de afiliarse al RAIS; pero si obliga a que toda la carga probatoria recaiga exclusivamente en el fondo, sin que exista un menor esfuerzo procesal en cabeza del demandante.

Dicha apreciación quiebra la lógica de las cargas probatorias en este tipo de procesos, toda vez, que la responsabilidad objetiva exige que la esfera de control sea exclusiva de quien causa el daño. Este aspecto no aplica en casos de traslado de régimen, dado que los potenciales pensionados, cuentan con el deber de asesorarse.

Veámoslo:

i). Obligaciones Legales del demandante según el Decreto 2241 de 2010 y en virtud de las obligaciones recíprocas del contrato de afiliación.

En este sentido el Decreto 2241 de 2010 que establece el Régimen de Protección al Consumidor Financiero determina las obligaciones en cabeza de los afiliados que pertenecen al Sistema General de Pensiones:

Artículo 4º. Deberes. Los consumidores financieros del Sistema General de Pensiones tendrán los siguientes deberes, en lo que les sea pertinente:

1. Informarse adecuadamente de las condiciones del Sistema General de Pensiones, del nuevo sistema de administración de multifondos y de las diferentes modalidades de pensión.

2. Aprovechar los mecanismos de divulgación de información y de capacitación para conocer el funcionamiento del Sistema General de Pensiones y los derechos y obligaciones que les corresponden.

3. Emplear la adecuada atención y cuidado al momento de tomar

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

N.I.T No. 901.761.709-8

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

decisiones, como son entre otras, la afiliación, el traslado de administradora o de régimen, la selección de modalidad de pensión y de entidad aseguradora que le otorgue la renta vitalicia o la elección de tipo de fondo dentro del esquema de "Multifondos", según sea el caso.

En todo caso, toda decisión por parte del consumidor financiero deberá contener la manifestación expresa de haber recibido la capacitación e información requerida para entender las consecuencias de la misma o en su defecto la manifestación de haberse negado a recibirla.

4. Leer y revisar los términos y condiciones de los formatos de afiliación, así como diligenciar y firmar los mismos y cualquier otro documento que se requiera dentro del Sistema General de Pensiones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 del Decreto 692 de 1994 y las normas que lo modifiquen o sustituyan.

5. Las decisiones que se tomen dentro del Sistema General de Pensiones, manifestadas a través de documentos firmados o de otros medios idóneos autorizados para ello, implicarán la aceptación de los efectos legales, costos, restricciones y demás consecuencias derivadas de las mismas. En tal sentido, cuando de conformidad con la normatividad aplicable el silencio o la no toma de decisión por parte de los consumidores financieros de lugar a la aplicación de reglas supletivas establecidas en ella con impacto en sus cuentas de ahorro pensional, se entenderá dicho silencio como la toma de una decisión consciente con los efectos legales, costos, restricciones y demás consecuencias que ello conlleve.

6. Mantener actualizada la información que requieren las administradoras del Sistema General de Pensiones de conformidad con la normatividad aplicable.

7. Informarse sobre los órganos y medios que la administradora ha puesto a su disposición para la presentación de peticiones, solicitudes, quejas o reclamos.

8. Propender por el uso de los mecanismos que las administradoras del Sistema General de Pensiones pongan a disposición de los consumidores financieros para la educación financiera y previsional, así como para el suministro de información.

De conformidad con la anterior normatividad existen unos deberes mínimos en cabeza de los afiliados al sistema general de pensiones, destacándose que el SILENCIO en el transcurso del tiempo se entenderá como una decisión consciente de permanecer en el Régimen seleccionado. La única manera de desvirtuar esta regla legal es demostrando la preexistencia de una fuerza que hubiere viciado el consentimiento.

Conclusión

En ese orden de ideas, la solicitud de traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por COLPENSIONES no sólo desconoce los elementos de juicio propios al proceso, sino también, lo establecido en los artículos 13 y 36 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003 y contrariando las reglas jurisprudenciales, ya que para el caso concreto no se cumple con los requisitos exigidos por del Acto legislativo 01 de 2005 y las Sentencias SU- 062 de 2010 y SU-130 de 2013.

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

IV. EXCEPCIONES

1. NO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra el régimen de transición para aquellas personas que al momento de entrar en vigencia dicha norma tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres o 15 años de servicio, señalando que no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad o para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

En ese orden de ideas las personas que se trasladen al Régimen de Ahorro Individual con solidaridad y posteriormente se devuelvan al 155, no conservaran el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Constitucional en sentencias C-789 de 2002 y SU-062 de 2010 en concordancia con el Decreto 692 de 1994 y el decreto 3995 de 2008 señalo que las personas que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994 o 30 de junio de 1995 en el caso de servidores públicos del orden territorial) ostenten 15 años de servicio y/o cotizaciones conservaran el régimen de transición en caso de traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida siempre que reúnan los siguientes requisitos:

- i) Al cambiarse nuevamente al régimen de prima media se traslade a él todo el ahorro que habían efectuado el afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad incluyendo lo que la persona aportó al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.
- ii) Dicho ahorro no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media con prestación definida.

Por lo anterior solo las personas que a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones acrediten 15 años o más de servicios y/o cotizaciones (750 semanas) conservaran el régimen de transición en caso de traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida cuando cumplan los requisitos anteriormente señalados.

Que según lo dispuesto en el inciso segundo de la Ley 100 de 1993, las personas que a 1 de abril de 1994 tuviesen 35 años o más de edad si son mujeres y 40 o más años de edad en el caso de los hombres o quince (15) o más años de servicio se les debe aplicar la edad para pensionarse, el número de semanas o tiempo cotizado y el monto pensional del régimen anterior al que venían afiliados, encontrando que el asegurado, reúne los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición anterior manifestado.

Sobre el beneficio del Régimen de Transición, es procedente manifestar que de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005, parágrafo transitorio 4, **el Régimen de Transición no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho Régimen, además tengan cotizadas 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del mencionado Acto Legislativo (22 de julio 2005); a los cuales se les mantendrá hasta el año 2014, encontrando que el asegurado NO cumple el requisito.**

Teniendo en cuenta lo anterior, se estudió la prestación conforme a lo establecido en el artículo 33 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la ley 797 de 2003 que a la letra dice: para tener derecho a la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta (60) años de edad si es hombre, a partir del 1 de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete años de edad para la mujer y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1.000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1 de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1 de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

Es necesario señalar que el status de pensionado sólo se adquiere cuando coincidan los requisitos mínimos de semanas de cotización y edad de acuerdo al año respectivo conforme al siguiente cuadro explicativo en el cual se establecen las reglas de la ley 797 de 2003 en su artículo 9, sin embargo el asegurado acredita la edad para acceder a la pensión de vejez, pero NO acredita las semanas cotizadas, por tanto mi mandante negó la pensión solicitada.

Nótese Su Señoría que la norma anteriormente transcrita establece claramente que para que se pueda optar por la pensión de vejez, es necesario, que se cumplan unos requisitos, como son el tiempo de servicio y la edad del afiliado, sin que se haya verificado el cumplimiento del primero de ellos, es decir, el requisito del tiempo de servicio, debido a que al momento de solicitar el beneficio de la pensión de vejez, el demandante, solo tenía cotizado un total de 7209 días válidamente cotizados para un total de 1029 semanas, tal y como se desprende de la historia laboral del aquí accionante, tiempo está por debajo del requerimiento legal, lo que hace que no cumpla con los requisitos legales.

2. NO HAY LUGAR A NULIDAD / INEFICACIA DE TRASLADO PERSONA YA PENSIONADA O CON DICHO STATUS

SL373-2021. Radicación n.º 84475. Magistrada ponente CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO. Diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al *statu quo ante*) (**SL1688-2019, SL3464-2019**), lo cierto es que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto. Basta con relevar algunas situaciones:

Desde el punto de vista de los bonos pensionales, puede ocurrir que se haya pagado el cupón principal por el emisor y las cuotas partes por los contribuyentes y, además, que dicho capital esté deteriorado en razón del pago de las mesadas pensionales. En tal caso, habría que revertir esas operaciones. Sin embargo, ello no parece factible porque el capital habría perdido su integridad y, por consiguiente, podría resultar afectada La Nación y/o las entidades oficiales contribuyentes al tratarse de títulos de deuda pública.

Desde el ángulo de las modalidades pensionales, en la actualidad las entidades ofrecen un diverso portafolio de alternativas pensionales. Algunas son retiro programado, renta vitalicia inmediata, retiro programado con renta vitalicia diferida, renta temporal cierta con

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

renta vitalicia de diferimiento cierto, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta temporal variable con renta vitalicia inmediata.

Cada modalidad tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, en algunas el afiliado puede pensionarse sin que importe la edad o puede contratar dos servicios financieros que le permitan acceder a una renta temporal cierta y a una renta vitalicia diferida. En otras, el dinero de la cuenta de ahorro individual es puesto en el mercado y genera rendimientos administrados por la AFP. Incluso se puede contratar simultáneamente los servicios con la AFP y con una aseguradora en aras de mejorar las condiciones de la pensión. Es de destacar que en la mayoría de opciones pensionales intervienen en la administración y gestión del riesgo financiero, compañías aseguradoras que garantizan que el pensionado reciba la prestación por el monto acordado.

Por lo tanto, no se trata solo de reversar el acto de traslado y el reconocimiento de la pensión, sino todas las operaciones, actos y contratos con el afiliado, aseguradoras, AFP, entidades oficiales e inversionistas, según sea la modalidad pensional elegida.

Si se trata de una garantía de pensión mínima, volver las cosas a su estado anterior, implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía. Como La Nación asume el pago de dicha prerrogativa, se requería la intervención de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que defiende los intereses del Estado que se verían afectados por la ineficacia del traslado de una persona que ya tiene el status de pensionado. Esto a su vez se encuentra ligado a lo dicho acerca de los bonos pensionales, pues la garantía se concede una vez esté definido el valor de la cuenta de ahorro individual más el bono.

Ni que decir cuando el capital se ha desfinanciado, especialmente cuando el afiliado decide pensionarse anticipadamente, o de aquellos casos en que ha optado por los excedentes de libre disponibilidad (art. 85 de la Ley 100 de 1993), en virtud de los cuales recibe la devolución de una parte de su capital ahorrado. En esta hipótesis, los recursos, ya desgastados, inevitablemente generarían un déficit financiero en el régimen de prima media con prestación definida, en detrimento de los intereses generales de los colombianos.

La Corte podría discurrir y profundizar en muchas más situaciones problemáticas que generaría la invalidación del estado de pensionado. No obstante, considera que **los ejemplos citados son suficientes para demostrar el argumento según el cual la calidad de pensionado da lugar a una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones.** (subraya y negrilla fuera de texto)

De acuerdo con lo expuesto, la Corte abandona el criterio sentado en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado.

3. INEXISTENCIA DEL DERECHO RECLAMADO O COBRO DE LO NO DEBIDO

Es claro que la persona que reclame su derecho a pensión tiene que haber cumplido con los requisitos que exige la ley para acceder a la misma, por cuanto este derecho, es derecho en la medida que sus titulares puedan demandar su cumplimiento con fundamento en las normas legales.

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

En virtud de la modificación presentada por la Ley 797 de 2003 el término mínimo de permanencia para que proceda el traslado entre regímenes pensionales es de cinco años, advirtiendo que a las personas que al 28 de enero de 2004 les faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podían trasladarse por una única vez entre regímenes hasta dicha fecha.

“Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”.

“b) Si el traslado se produce del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, se le acreditarán en este último el número de semanas cotizadas en el primero y se transferirá el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos y el bono pensional cuando sea del caso. Las cotizaciones voluntarias cuyo retiro no se le haya efectuado al momento del traslado, se devolverán al afiliado, previa solicitud efectuada seis (6) meses antes del traslado” **(Texto entre paréntesis nuestro).**

Todos los usuarios del S.G.P, incluidos los sujetos del régimen de transición, bien por edad o por tiempo de servicios, pueden elegir libremente entre el régimen de prima media o el régimen de ahorro individual, conservando la posibilidad de trasladarse entre uno y otro, en los términos del literal e) del artículo 13 de la Ley 100/93, tal como fue modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, es decir, cada cinco años contados a partir de la selección inicial y siempre que no les falte menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. Sin embargo, en el caso de los beneficiarios del régimen de transición por tiempo de servicios (15 años o más de cotizaciones), estos pueden cambiarse de régimen sin límite temporal, es decir, en cualquier tiempo, por ser los únicos que no quedan excluidos de los beneficios del régimen de transición, en los términos de las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004. Para tales efectos, la única condición será trasladar al régimen de prima media todo el ahorro efectuado en el régimen de ahorro individual, el cual no podrá ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubieren permanecido en aquel régimen.

Es de tener en cuenta señor Juez que para el caso concreto no se cumple con los requisitos exigidos por del Acto legislativo 01 de 2005 y las Sentencias SU- 062 de 2010 y SU-130 de 2013.

4. PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS LABORALES

Indica la honorable Corte Suprema de Justicia “*Ciertamente el Tribunal se equivocó en la aplicación de los preceptos denunciados por la censura, artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T y SS, toda vez que tomó un hito distinto al fijado por el legislador para contabilizar la prescripción. Según el juez colegiado, el término de los tres años comenzó a correr desde el momento en que los derechos se hicieron «efectivos», aplicación abiertamente contraria con lo establecido por el legislador, quien adoptó el parámetro de la exigibilidad de la obligación para comenzar a contar el término cuyo trascurso, sin el accionar del acreedor, conduce a la extinción del derecho. Ilustra al respecto, lo dicho por esta Corte en la sentencia CSJ SL 4222 de 2017, a saber:*

En las materias del derecho del trabajo y la seguridad social, sabido es, como ya se recordó por la Corte en la sentencia atrás citada, que son dos los preceptos que de manera general y con el carácter de orden público reglan la prescripción extintiva de la

Bogotá – Cl. 12b #No. 8-23 Oficina 314

Ibagué – Cra 3 # 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real

N.I.T No. 901.761.709-8

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

acción o del derecho: los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: el primero, en lo correspondiente a los derechos regulados en ese cuerpo normativo y, el segundo, en lo que tiene que ver con el ejercicio de las acciones que emanan de las leyes sociales. Pero es importante subrayar que ambas disposiciones contemplan una prescripción trienal cuyo término de consolidación empieza a correr desde la 'exigibilidad' de la respectiva obligación. También en ambas no basta para la pérdida o extinción del derecho el simple paso del tiempo previsto en la ley, sino que se requiere, además, la inactividad en el derecho o en el ejercicio de la acción durante ese mismo tiempo, pues a decir de la segunda disposición, la simple reclamación escrita del trabajador, recibida por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinados, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso de tiempo igual.

De ese modo, la prescripción extintiva de acciones y derechos en estas materias opera atada no solamente al transcurso de un tiempo de inactividad previsto en la ley, con la posibilidad de ser interrumpido mediante una reclamación formal y singularizada, sino también, a la de la 'exigibilidad' de la obligación demandada, entendida ésta como la posibilidad de hacerse efectiva o ejecutable sin necesidad de advenimiento de hecho alguno, pues cuenta con la característica de ser pura y simple; o porque estando sometida a plazo o condición, se ha producido el fenecimiento de aquél o el cumplimiento de ésta.

La exigibilidad de la obligación apunta, adicionalmente, a su ejecución instantánea o a su desarrollo en un lapso de tiempo determinado o indeterminado, calificándose en la primera situación la obligación como de 'tracto único', en tanto que en el segundo caso como de 'tracto sucesivo'.

En este orden de ideas, el término de prescripción se debe contar a partir del momento en que los derechos pretendidos se hacen exigibles....²

5. PRESCRIPCIÓN DE MESADAS NO COBRADAS OPORTUNAMENTE

Se propone esta excepción con la clara advertencia que la misma **no implica el más mínimo reconocimiento de derecho alguno de los que reclama el demandante.**

Como primera medida es unánime el criterio sobre la Imprescriptibilidad del derecho pensional que permite que una persona pueda reclamar en cualquier tiempo una prestación otorgada por el Sistema General de Pensiones.

Sin embargo, es igualmente claro que la Corte Suprema de Justicia en Jurisprudencia de vieja data ha adocinado que **aun siendo imprescriptible el derecho pensional, no lo son así las mesadas pensionales e incluso tampoco los factores salariales que dieron lugar a la prestación:** "la prescripción sólo se presenta en cuanto a las mensualidades que debe percibir el trabajador una vez hecha la solicitud de reconocimiento con los requisitos de rigor y que no recibe por su negligencia. La prescripción, en tal caso, determina la pérdida de aquellas mensualidades que se dejen de cobrar (...)"

El tema de la prescripción de derechos sociales se encuentra establecido en el artículo 488 del C.S.T., en los siguientes términos: "Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este Código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto".

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. SL 219-2018. Radicación Nro. 48041. Magistrado ponente JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

En ese mismo sentido el artículo 151 del C.P.T.S.S., dispone que *"Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectara obligación se haya hecho exigible. El simple redamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual"*.

Por lo anteriormente expuesto, el fenómeno de la prescripción operaría para el caso en autos desde el agotamiento de la reclamación administrativa ante COLPENSIONES, tendiente a obtener el reconocimiento y pago de la reliquidación de la pensión de vejez reconocida a la demandante.

6. PRESCRIPCIÓN / INEFICACIA

Al revisar decisión proferida en la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA, la Honorable Corte Suprema de Justicia, indicó:

"...el tribunal cuestionado comenzó por manifestar que «de otro lado, la única inconformidad planteada con el recurso fue la declaratoria de prescripción de la acción impetrada en procura de obtener la declaratoria de ineficacia del traslado de la actora que hizo el 12 de abril de 1998 del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, de manera que en virtud del principio de consonancia (...) solo a ese aspecto se contraerá la sala para resolver la apelación y en ese orden de ideas es incuestionable la consideración del a quo en cuanto estimó que dicho traslado era ineficaz, pero no podía ser declarado por haber transcurrido más de cuatro años desde le referido traslado hasta la petición de la nulidad, término que tuvo en cuenta porque consideró el traslado como (...) un negocio jurídico en el cual se expresó la voluntad, para lograrlo. Tampoco es dable por la misma razón del principio de consonancia, estudiar la naturaleza de la decisión de trasladarse del régimen de prima media al RAIS el 12 de abril de 1998 como se ha dicho inmediatamente antes, que tomó la demandante y que el juzgado señaló como un acto de voluntad, para que vicios del consentimiento quiera exención, son los previstos en la ley sustantiva civil, de manera que la acción rescisoria para perseguir la nulidad de tal acto por algún vicio de consentimiento en cuanto a la prescripción, se sigue por el artículo 1750 del Código Civil que dispone "el plazo para pedir la rescisión durará cuatro años, este cuatreño se contará en el caso de violencia desde el día en que esta hubiere cesado y en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato"».

Para finalmente concluir el despacho accionado que, *«[d]e manera que siendo incuestionable que el traslado cuya ineficacia se pretendió se produjo el 12 de abril de 1998, la prescripción de la acción impetrada para anularla alegando error por vicio en el consentimiento en la toma de esa decisión, prescribió el 12 de abril de 2002, es decir que para la fecha en que la demandante solicitó su regreso al régimen de prima media o en el que impetró la nulidad de ineficacia de ese traslado, lo hizo en octubre de 2013, no interrumpió el término de la prescripción que ya estaba consolidado. Si en gracia de discusión se entendiera que lo que se discute en el proceso es una controversia, entre una usuaria del sistema general de seguridad social y la entidad administradora del fondo de pensiones y por ello, para la prescripción se aplicaran las normas del Código Procesal del Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo que regulan de manera expresa el término para prescribir las acciones emanadas de los derechos sociales, ese término que allí se señala es de tres años, pues con mayor razón estaría entonces vencido el término para impetrar la acción que se intentó con este proceso».*

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

De conformidad con lo anterior, se encuentra la decisión atacada arraigada en argumentos que consultaron reglas mínimas de razonabilidad jurídica...³

SENTENCIAS: C-086 DE 2016; C-1024 DE 2004; C-1025 DE 2007; C-789 DE 2002; C-596 DE 1997; SU 130 DE 2013; SU 062 DE 2010

7. NO HAY LUGAR AL COBRO DE INTERESES MORATORIOS

No hay lugar al cobro de intereses moratorios. El demandante reclama intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; sin embargo, no hay lugar a su declaración, toda vez que el fundamento de éstos es la mora en el reconocimiento y pago de una pensión, Colpensiones no cuenta con facultades para reconocer **Pensión a una persona que no está afiliada a la Entidad.**

También lo tiene señalado la jurisprudencia laboral, no proceden para este tipo de súplica, tal como lo enseña la alta Corporación del trabajo en sentencia del 4 de agosto de 2009, radicado 35113, en la que se dijo que los moratorios sólo proceden por el no pago de la prestación, más no para el cambio de su cuantía producto de un cambio normativo en su liquidación. Por tanto no resulta aplicable.

Igualmente, existe **INCOMPATIBILIDAD DE LOS INTERESES DE MORA CON LA INDEXACIÓN DE LAS SUMAS ADEUDADAS, conforme la siguiente jurisprudencia:**

SENTENCIA SL 9316-2016, SENTENCIA CSJ SL 28 ag. 2012. rad. 39130, SENTENCIA CSJ SL 6114 - 2015, 18 mar. 2015, rad. 53406

Ahora bien, en lo referente al improcedencia de reconocimiento de los intereses moratorios toda vez que conforme a la posición mayoritaria de la Sala, no son de aplicación en el caso en concreto, por cuanto la prestación pensional es reconocida en virtud de la Ley 71 de 1988 y *«no corresponde a las contempladas en el régimen general de pensiones implementado por la Ley 100 de 1993, como lo tiene adoctrinado reiteradamente la jurisprudencia de esta Sala, entre otras, en las sentencias CSJ SL6297-2014, CSJ SL13076-2014, CSJ SL4523-2015 y CSJ SL2706-2016»* Ver sentencia CSJ SL994-2018 del 21 de marzo de 2018, rad. 66897.

Al margen de las razones de defensa principales, en todo caso, la pretensión frente a los intereses moratorios, estos sólo se causan, tratándose de la pensión de vejez e invalidez, a partir del sexto mes siguiente a la presentación de la solicitud de reconocimiento pensional, y al tercer mes en los eventos que la prestación consista en pensión de sobrevivientes. Sentencias: T-5800-03, C-1024-04, SU-065-18, SL 5541 del 14 de noviembre de 2018, SL 14528/14, SL 4754/19, SL 11897 de 2016, SL 4338/19 CSJ, T-586-12, Sentencia C-601-00.

8. NO HAY LUGAR A INDEXACIÓN

La jurisprudencia constitucional ha entendido que la indexación es un mecanismo para garantizar la actualización del salario base para liquidación de la primera mesada pensional, cuando ha mediado un tiempo sustancial entre el momento en que el trabajador se retira de su empresa y el reconocimiento de la pensión. Dicha garantía tiene fundamento en el derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de la pensión y reside fundamentalmente en los artículos 48 y 53 de la Carta.

³ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. STL 1366-2017. Radicación Nro. 46004. Magistrado ponente JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ.

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

No hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios y la indexación por cuanto se estaría fulminando una doble condena por la misma causa.

No hay lugar a pagar mesada pensional alguna, ni indexación, toda vez que el fundamento es el reconocimiento y pago de una pensión, Colpensiones no cuenta con facultades para reconocer **Pensión a una persona que no está afiliada a la Entidad.**

9. INOPONIBILIDAD POR SER TERCERO DE BUENA FE

A. LA INOPONIBILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LA AFP ANTE COLPENSIONES, EN CASOS DE INEFICACIA DE TRASLADO DE RÉGIMEN", por las siguientes razones:

Entendida la inoponibilidad (mecanismo protector), como la ineficacia de un acto o la ineficacia de una nulidad frente a terceros. Es decir, que la ineficacia o nulidad, resultaría inoponible frente a terceros de buena fe como en este caso Colpensiones, a la par que la figura de la inoponibilidad constituye un mecanismo protector del derecho a la seguridad jurídica, que en el caso de Colpensiones se consolida por el tiempo en que aquellos afiliados permanecieron en el RAIS, aunado a que la seguridad jurídica que se deriva de la inoponibilidad pretende proteger intereses patrimoniales de terceros, que en este caso, tienen alcance frente al principio de sostenibilidad financiera del sistema y planeación de la reserva pensional.

De la misma manera, la Sala de Casación Civil, ha definido la inoponibilidad como aquella que "valora la confianza razonable de los terceros de buena fe en aquellos negocios que se presentan objetivamente como válidamente celebrados", ratiocinio, que a su vez se deriva del principio de relatividad de los negocios jurídicos, es decir, que solo se producen efectos respecto de quienes voluntariamente participan de aquél.

Precisamente, la jurisprudencia en la especialidad civil, indica que la inoponibilidad no requiere de la validez del negocio jurídico, muy por el contrario, algo que es ineficaz entre las partes (como en este caso la afiliación al RAIS), si se tenga como eficaz frente al tercero de buena fe (en este caso Colpensiones). Así se ha dicho que: "cuyo caso no le interesa que no lo alcancen los efectos de un negocio válido e incontrovertible entre las partes, sino todo lo contrario, esto es que se tenga como válido frente a su calidad de tercero un negocio jurídico que carece de eficacia entre los celebrantes". Es decir, que la inoponibilidad en este caso frente a un negocio jurídico ineficaz, permite que sus efectos se mantengan ante un tercero de buena fe, o en otras palabras para el caso concreto, que se mantengan los efectos de la afiliación al RAIS frente a Colpensiones,

para lo cual, se probará el desmedro patrimonial que sufre la reserva pensional del RPM en caso de resultarle oponible la ineficacia de los traslados irregulares al RAIS.

B) RESPONSABILIDAD SUI GENERIS DE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL:

Resulta también relevante indicar, que las entidades de Seguridad Social no solo se sujetan a la responsabilidad propia de los contratos de aseguramiento, sino que se ciñen a obligaciones de índole constitucional que trascienden como administradoras de un servicio público de seguridad social. En este caso, la responsabilidad de las AFP por la ineficacia de un traslado, no sólo se deben enmarcar a reparar el daño individualmente sometido a consideración de un Juez, sino que debe tener alcance frente a los daños indirectos que irradian o comprometen los derechos constitucionales de terceros, en razón de la reserva patrimonial de los pensionados y afiliados del RPM que se ven comprometidos con el desmedro que sufre la reserva pensional, y que si bien es cierto,

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

la jurisprudencia ha indicado que al afiliado no le es atribuible y por ende no se le exige la equivalencia económica de los aportes que se devuelven del RAIS al RPM, no es menos cierto, que tal reparo económico lo debe asumir quien ha causado el daño y por virtud de la operancia de la inoponibilidad.

C) SOLICITUD RESPETUOSA JUICIO DE PROPORCIONALIDAD Y PONDERACIÓN:

Toda vez que la decisión judicial de declarar la ineficacia de traslado, repercute, en que se crea de manera injustificada y desproporcionada una obligación (con efectos patrimoniales) en cabeza de Colpensiones, quien administra los aportes de miles de pensionados y afiliados, y dicha medida para restablecer los derechos del afiliado, no pasaría el segundo criterio de la “necesidad”, toda vez que si existen otros medios menos lesivos para mantener los derechos del afiliado, y es que quien se deba hacer cargo de las prestaciones económicas que se deriven de la ineficacia sea la AFP, quien ha administrado dichos recursos y ha generado los respectivos rendimientos, así mismo, al ponderar los bienes jurídicos en tensión, se podría demostrar que poner en cabeza de Colpensiones dicha responsabilidad, tiene un impacto más lesivo para la sostenibilidad financiera del sistema, evaluando diferentes variables, tales como: (i) que Colpensiones es la única administradora del RPM, que alberga una mayor número de pensionados cuyas pensiones se reconocen con subsidio de las arcas del Estado, de forma tal, que se estaría solventado con estos recursos, el desmedro económico ocasionado por particulares (AFP).

10. NO ESTA LLAMADA A RESPONDER POR DAÑO EMERGENTE NI POR LUCRO CESANTE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

SL373-2021. Radicación n.º 84475. Magistrada ponente CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO. Diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

Estas circunstancias denotan que el demandante adquirió el estatus jurídico de pensionado de manera anticipada, prestación que a su vez fue financiada con los recursos de su cuenta de ahorro individual y el bono pensional, de manera que no es factible retrotraer tales situaciones como se pretende.

Lo anterior, no significa que el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparación. Es un principio general del derecho aquel según el cual quien comete un daño por culpa, está obligado a repararlo (art. 2341 CC). Por consiguiente, si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información (culpa) y, por ello, sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora.

El artículo 16 de la Ley 446 de 1998 consagra el principio de reparación integral en la valoración de los daños. Este principio conmina al juez a valorar la totalidad de los daños irrogados a la víctima y en función de esta apreciación, adoptar las medidas compensatorias que juzgue conveniente según la situación particular del afectado. Es decir, el juez, en vista a reparar integralmente los perjuicios ocasionados, debe explorar y utilizar todas aquellas medidas que considere necesarias para el pleno y satisfactorio restablecimiento de los derechos conculcados.

En la medida que el daño es perceptible o apreciable en toda su magnitud desde el momento en que se tiene la calidad de pensionado, el término de prescripción de la acción debe contarse desde este momento.

UNIÓN TEMPORAL

REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

11. DECLARATORIA DE OTRAS EXCEPCIONES

Solicito de manera comedida que si el despacho encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas o algunas pretensiones de la demanda, se abstenga de examinar las restantes de acuerdo a lo estatuido en el art. 282 del C.G.P., surtiendo una aplicación analógica según se impone en el art. 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

12. APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES

Que sí son aplicables para el presente caso, tal como quedó demostrado en esta contestación, y demás normas aquí relacionadas.

Desde ahora me reservo la facultad de ampliar y proponer nuevas excepciones en el desarrollo de la audiencia de que trata el artículo 72 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, y solicitar pruebas en respaldo de las mismas.

V. PETICIÓN

Como quiera que de la interpretación tanto jurídica como jurisprudencial realizada a lo largo del presente escrito, se muestra fehacientemente, que, por parte de COLPENSIONES, no se ha omitido el reconocimiento de ninguna prestación a que tuviere derecho la demandante, sírvase Señora Juez NEGAR las pretensiones de la demanda.

VI. PRUEBAS

Para el total convencimiento de los por mi expresado, solicito a la Señora Juez tener como pruebas las siguientes:

1. DOCUMENTOS

Expediente Administrativo e Historia Laboral del demandante en medio magnético

2. INTERROGATORIO DE PARTE

Solicito respetuosamente se sirva citar y hacer comparecer al despacho al demandante para que absuelva el interrogatorio que oralmente le formule, respecto de los hechos y pretensiones de la demanda.

3. DOCUMENTALES A.F.P R.A.I.S.

Solicito Oficiar a la Administradora de Fondo de Pensiones R.A.I.S., con el fin de que informe y remita:

a) Si el demandante ostenta la calidad de pensionado en dicho régimen privado, o si ya cumplió los requisitos que le otorgan el estatus pensionado pese a no encontrarse percibiendo aún la pensión.

b) Cuáles fueron todas las operaciones y contratos financieros que se celebraron y ejecutaron con terceros para consolidar el soporte financiero del pensionado, y se alleguen los respectivos soportes que lo acreditan.

c) Se certifique y allegue los soportes atinentes al trámite de emisión y expedición de bonos pensionales en el caso del demandante

UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023

41001310500120230039800
Contestación reforma de la demanda

VII. ANEXOS

Poder para actuar, debidamente otorgado por la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, y certificado sobre la representación legal de la entidad.

Los enunciados en el acápite de pruebas.

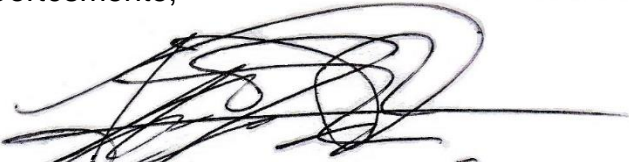
VIII. NOTIFICACIONES

El suscrito recibe notificaciones en Ibagué Cra, 3 Nro. 12 – 36 Oficina 405 – Pasaje real, teléfono Celular Nro. 317 865 18 42, correo electrónico: magisteriuris@yahoo.com

Los extremos procesales, en las direcciones indicadas en la demanda.

O en la secretaría de su Despacho.

Cortésmente,



JUAN ALVARO DUARTE RIVERA
C.C. 79'523.279 de Bogotá D.C.
T.P. 192.928 del C. S. de la J.

Señor
JUZGADO 001 LABORAL DE CIRCUITO DE NEIVA
E. S. D.

REFERENCIA: SUSTITUCIÓN PODER
REFERENCIA: ORDINARIO LABORAL DE UNICA INSTANCIA
RADICADO No. 41001310500120230039800
DEMANDANTE MARTHA HELENA GUZMAN MESA
DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

Respetado señor Juez:

MAURICIO ROA PINZÓN, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.513.792 de Bogotá, D.C., y tarjeta profesional No. 178.838 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de representante principal de la UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023, con NIT 901.761.609-8, actuando conforme al poder general, amplio y suficiente otorgado mediante la Escritura Pública No. 1969 del 19 de octubre de 2023 protocolizada en la Notaria Octava del Círculo Notarial de Bogotá D. C., que fue conferido por DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.983.390 expedida en Bogotá D.C., en su condición de representante legal suplente de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y conforme a las facultades establecidas en la cláusula segunda de la mencionada escritura pública, procedo muy respetuosamente, por medio del presente escrito a SUSTITUIR el mencionado poder especial, amplio y suficiente a JUAN ÁLVARO DUARTE RIVERA, igualmente mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 79.523.279 y tarjeta profesional No. 192.928 del C.S. de la J., con correo electrónico de magisteriuris@yahoo.com . Para que realice la gestión procesal necesaria para la defensa jurídica de esta Entidad dentro del proceso del asunto ante su despacho.

A quien sustituyo el poder queda con las mismas facultades a mí conferidas inicialmente, esto es, las facultades generales de ley y las especiales de conciliar, aportar y solicitar pruebas, sustituir, reasumir, desistir, transigir, recibir, interponer recursos, y demás prerrogativas que sean necesarias para cumplir el mandato conferido.

Solicito respetuosamente se sirva reconocer personería al abogado sustituto en los términos y para los fines pertinentes del poder inicialmente otorgado.

Sin otro en particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

Acepto,



MAURICIO ROA PINZÓN
C.C. No. 79.513.792 de Bogotá, D.C.
T.P. No. 178.838 del C. S. de la J.



JUAN ÁLVARO DUARTE RIVERA
C.C. No. 79.523.279
T.P. No. 192.928 del C.S. de la J.



Mauricio Roa Pinzon <aexmroap@colpensiones.gov.co>

Fwd: poder general union temporal repredentacion juridica colpensiones 2023

1 mensaje

Diana Yaritza Cubillos Ramirez <dycubillosr@colpensiones.gov.co>

24 de octubre de 2023, 6:54

Para: Mauricio Roa Pinzon <aexmroap@colpensiones.gov.co>

Cc: William Rafael Martinez Acevedo <wrmartineza@colpensiones.gov.co>

Buenos días,

Respetuosamente remito Escritura No. 1969 de 2023, de poder General a la Firma UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023, para el ejercicio de la defensa de los procesos contra Colpensiones en la Regional Sur, en virtud del Contrato No 061 de 2023.

Cordial saludo,



Diana Yaritza Cubillos Ramírez

Profesional Junior 300 - 01

Dirección Regional Sur

Carrera 5 N° 31 - 50

(1) 2170100 Ext. 8225-8226 - celufijo [3174270454](tel:3174270454)

Ibagué - Tolima, Colombia
www.colpensiones.gov.co

----- Forwarded message -----

De: djovaller@colpensiones.gov.co <djovaller@colpensiones.gov.co>

Date: mar, 24 oct 2023 a las 6:45

Subject: poder general union temporal representacion juridica colpensiones 2023

To: djovaller@colpensiones.gov.co <djovaller@colpensiones.gov.co>, poderesjudiciales@colpensiones.gov.co <poderesjudiciales@colpensiones.gov.co>, William Rafael Martinez Acevedo <wrmartineza@colpensiones.gov.co>, Diana Yaritza Cubillos Ramirez <dycubillosr@colpensiones.gov.co>, Jose Angel Urias Mendieta Guerrero <jamendietag@colpensiones.gov.co>, Ludy Santiago Santiago <lsantiagos@colpensiones.gov.co>, Bertha Marcela Orjuela Russi <bmorjuelar@colpensiones.gov.co>

Cordial Saludo

Por medio del presente remito poder general de la firma referencia del asunto.

gracias

 [Untitled].pdf
7533K

República de Colombia



SGC774376988

NOTARÍA OCTAVA (8ª) DE BOGOTÁ D.C.

P 1969

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE (1969)

FECHA DE OTORGAMIENTO: DIECINUEVE (19) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023).

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO

CÓDIGO	ESPECIFICACIÓN	VALOR ACTO
00000409	PODER GENERAL	SIN CUANTIA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO

SOCIEDAD PODERDANTE:

RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE	NIT. 900.336.004-7

SOCIEDAD APODERADA:

RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURIDICA COLPENSIONES 2023	NIT 901.761.609-8

En el despacho de la Notaría Octava (8ª) del Círculo de Bogotá, D.C., cargo que funge el Doctor **WILLIAM URREA ROCHA** como notario OCTAVO (8º) ENCARGADO, se realizan los siguientes actos jurídicos: -----

PODER GENERAL

Compareció: DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificado con cédula de ciudadanía número CC 79.983.390 expedida en Bogotá D.C., de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, con domicilio y residencia en Bogotá D.C., en su condición de Representante Legal Suplente de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**,

legis

República de Colombia

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO - UCNC

William Urrea Rocha
Notario 8 (E)SGC774376988
PO016170412

988P63090W4G73W6

01/10/2023 17:03:23 PC016170412/06/2023

WILLIAM URREA ROCHA
NOTARIO 8 DE BOGOTÁ D.C. (E)

EICE, con NIT. 900.336.004-7, calidad que acredita el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien manifestó que en aplicación de los artículos 440 y 832 del Código de Comercio; el artículo 2142 del Código Civil y la Circular básica Jurídica Capítulo III Título I Parte 1 de la Superintendencia Financiera de Colombia, confiere poder general, amplio y suficiente a la **UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURIDICA COLPENSIONES 2023** con **NIT 901.761.609-8**, conformada por las sociedades Roa Pinzón y Abogados S.A.S, con NIT 901.137.158-2; Legal Grove Grupo Jurídico S.A.S. con NIT 901.481.192-7 y Moreno Y & D Consultores S.A.S. con NIT 900.925.886-3, según consta en documento privado del 12 de septiembre de 2023, documento que se protocoliza con el presente instrumento público, para que en nombre y representación de la Administradora Colombiana de Pensiones - **COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7**, actúe en los en los siguientes términos: -----

CLÁUSULA PRIMERA. – Otorgo por el presente instrumento público **PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** a partir de la suscripción de la presente escritura a la **UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURIDICA COLPENSIONES 2023** con **NIT 901.761.609-8**, para que ejerza la representación judicial y extrajudicial, tendiente a la adecuada defensa de los intereses de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**, ante las Autoridades Judiciales y el Ministerio Público, realizando todos los trámites, actos y demás gestiones requeridas en los procesos o procedimientos en los cuales la administradora intervenga como parte pasiva, y que se adelanten en cualquier lugar del territorio nacional; facultad esta que se ejercerá en todas las etapas procesales y diligencias que se requieran atender ante las mentadas autoridades, incluidas las audiencias de conciliación judicial y extrajudicial. -----

El poder continuará vigente en caso de mi ausencia temporal o definitiva como Representante Legal Suplente de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7**, de conformidad con el inciso 6 del artículo 76 del Código General del Proceso, el cual establece que *"tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda."* -----

CLÁUSULA SEGUNDA. – El representante legal de **UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURIDICA COLPENSIONES 2023** con **NIT 901.761.609-8**,

legis

República de Colombia

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO - UCNC

República de Colombia

Página. No

1969



SGC974376987

queda expresamente autorizado, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso para sustituir y ejercer el poder conferido dentro de los parámetros establecidos en el artículo 77 del Código General del Proceso, teniendo con ello facultad el apoderado sustituto para ejercer representación judicial y extrajudicial, de tal modo que en ningún caso la Entidad poderdante quede sin representación judicial y extrajudicial, y en general para que asuma la representación judicial y extrajudicial de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES** -----

La representación que se ejerza en las conciliaciones sólo podrá adelantarse con sujeción a las directrices del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, CLÁUSULA TERCERA.** - Ni el representante legal de **UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURIDICA COLPENSIONES 2023** con NIT 901.761.609-8, ni los abogados que actúen en su nombre podrán recibir sumas de dinero en efectivo o en consignaciones por ningún concepto. -----

Queda expresamente prohibida la disposición de los derechos litigiosos de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**, por parte del representante legal y de los abogados sustitutos que actúen en nombre de **UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURIDICA COLPENSIONES 2023** con NIT 901.761.609-8, sin la autorización previa, escrita y expresa del representante legal principal o suplente de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES** y/o del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones. **CLÁUSULA CUARTA.** - Al representante legal y a los abogados sustitutos que actúen en nombre de **UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURIDICA COLPENSIONES 2023** con NIT 901.761.609-8, les queda expresamente prohibido el recibo o retiro de las órdenes de pago de depósitos judiciales que se encuentren a favor de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES**, con NIT. 900.336.004-7. -----

HASTA AQUÍ LA MINUTA -----

PAGADO EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, LEY MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE (1819) DEL DOS MIL DIECISÉIS (2016), ARTICULO CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) POR INTERMEDIO DE LA NOTARÍA OCTAVA (8ª) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. -----

SGC974376987 PO016170413

AVF43BJRM7842599

ECV24400444... 17-03-23 PO016170413/2023

WILLIAM DUEBENROTH
NOTARIO DUEBENROTH D.C. (E)

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, y las demás normas concordantes, a través de las cuales se establecen disposiciones generales en materia de hábeas data y se regula el tratamiento de la información que contenga datos personales, las partes intervinientes en el presente instrumento manifestamos de manera expresa que autorizamos de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a la **NOTARIA OCTAVA DE BOGOTÁ D.C.**, para que en los términos legalmente establecidos realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y en general, el tratamiento de los datos personales que hemos procedido a entregar, en virtud de las relaciones legales, en desarrollo y ejecución de los fines descritos en el presente instrumento.— En ese sentido las partes declaramos conocer que los datos personales objeto de tratamiento, serán utilizados específicamente para las finalidades derivadas del otorgamiento del presente instrumento. -----

ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN

Se advirtió a el(la) otorgante: -----

- 1.- Que las declaraciones emitidas por el(ella) deben obedecer a la verdad. -----
- 2.- Que es(son) responsable(s) penal y civilmente en el evento que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales. -----
- 3.- Que la Notaría se abstiene de dar fe sobre el querer o fuero interno de la otorgante que no se expresó en este documento. -----

4.- Advertido(a) del contenido del Artículo sexto (6°) del Decreto Ley novecientos sesenta (960) de mil novecientos setenta (1970), la otorgante insistió en firmar este instrumento tal como está redactado, y así se autoriza entonces por la Notaría. -----

El(la) otorgante, declara que obra dentro del marco de sus facultades y/o restricciones y que se hace expresamente responsable de la vigencia y amplitud de tal poder o calidad, y que a la fecha no ha sido notificada de revocatoria o modificación alguna de los términos y condiciones de mi mandato. -----

El(la) otorgante hace constar que ha verificado cuidadosamente sus nombres y apellidos completos, su estado civil, el número de su documento de identidad y declara que todas las informaciones consignadas en el presente instrumento son correctas, en consecuencia asume la responsabilidad que se deriva de cualquier inexactitud en el



SGC174378986

Notaria 8

Del Círculo de Bogotá D.C.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTARÍA OCTAVA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.****ESCRITURA****Nº 1969****Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012**Ante el Notario **8** del Círculo de Bogotá D.C. Compareció:**MURREGO ESCOBAR DIEGO ALEJANDRO** Identificado(a) con C.C. 79983390

Quien autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariainlinea.com para verificar este documento código kbzr2.

**Cod. KBZR2**

7299

SGC174378986

Firma Compareciente


WILLIAM URREA ROCHA
NOTARIO OCTAVO (E) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
9305

legis
República de Colombia

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIO COLOMBIANO - UCNC

9CCG1W1KN8V3ZYWG

04/09/2023

WILLIAM URREA ROCHA
NOTARIO (E) DE BOGOTÁ D.C. (E)

Nº 1969

**ACTA DE REPARTO NOTARIAL
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

TIPO DE REPARTO	Sin categoría
ENTIDAD OBLIGADA	
NOMBRE:	Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones
CORREO:	poderesjudiciales@colpensiones.gov.co
DIRECCIÓN:	Carrera 100 72-13 torre A
SOLICITUD	
FECHA:	2023-10-11 09:15:10
ACTOS:	90000409 - PODER POR ESCRITURA PUBLICA.
OBSERVACIONES:	EL PODER ES NETAMENTE DE REPRESENTACION JUDICIAL POR LO CUAL LA MATRICULA NO TIENEN NINGUN VALOR
INTERVINIENTES	
NOMBRE / CEDULA:	UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURIDICA COLPENSIONES 2023, 901.761.609-6, Administradora Colombiana De Pensiones Colpensiones, 910336004-7
CORREO:	roapinzon.abogados@gmail.com poderesjudiciales@colpensiones.gov.co
REPARTO	
ACTA DE REPARTO	23488
FECHA:	2023-10-11 09:16:08
NOTARIA:	OCTAVA BOGOTA
CATEGORÍA DE REPARTO:	Sin categoría
HASH:	7cce454831bb2fc95672e3ed81c705e7
DESCRIPCIÓN	
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA - BOGOTA
MUNICIPIO:	BOGOTA
DIRECCIÓN:	cra 10072-33
CUANTIA:	0
UNIDADES:	0
MATRICULAS:	50C-00000

La anterior información fue generada por el Sistema Integrado de Servicios y Gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Se expide en Bogotá, D.C., a 2023-10-13.

CARLOS ENRIQUE MELENIE HURTADO

Director de Administración Notarial

Verificar en sistema

https://servicios.superintendado.gov.co/validacion_reparto/7cce454831bb2fc95672e3ed81c705e7.pdf

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y AUTENTICACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de septiembre de 2023 Hora: 15:07:15
Activo No. 442185048
Valor: \$ 7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 82368204583478

Verifique el contenido y veracidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/verificadordelcomercio y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: LEGAL GROVE GRUPO JURIDICO SAS
NIT: 901481192 7 Administración: Dirección Seccional
De Impuestos De Bogotá
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 03373957
Fecha de matrícula: 30 de abril de 2021
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 28 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Av Boyacá 72 15 To 2 Ap 15 06
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: asesorias.juridicas2014@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 3112502549
Teléfono comercial 2: 3138668382
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Av. Boyacá No 72-15 Torre 2
Apto.

Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: asesorias.juridicas2014@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 3112502549
Teléfono para notificación 2: 3138668382
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo

Página 1 de 1

1969

SGC374376985

5ICRV91ZY78M1A4

04/09/2023
WILLIAM URIBE
NOTARIO E DE BOGOTÁ D.C. (E)

legis
República de Colombia
UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO - UCNC

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de septiembre de 2023 Hora: 15:07:15
Número del Documento: 027000098
Valor: \$ 7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 828404158AF8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.rch.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación no puede realizarse de manera ilimitada, dentro de 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 30 de abril de 2021 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 2021, con el No. 027000098 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada LEGAL GROVE GRUPO JURIDICO SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene como objeto la prestación de servicios jurídicos, entre ellos se encuentran: 1) la consultoría en cualquier campo del Derecho, actividades específicas en desarrollo como el diagnóstico, gestión, valoración, proyección y planeación; 2) la representación legal en trámites judiciales y extrajudiciales; 3) Gestora de procedimientos para la elaboración de estrategias de defensa, la cual la sociedad tendrá autonomía para decidir sobre sus métodos y técnicas oportunas para las mismas; 4) La contratación y subcontratación de servicios de profesionales especializados en las diferentes áreas del objeto social; 5) la suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales en cualquier modalidad, naturaleza o denominación; 6) Ejecutar contratos sobre activos, los cuales implican: Gestionar, adquirir, cobrar, recaudar, intermediar, enajenar y arrendar toda clase de bienes muebles e inmuebles, acciones, títulos valores, incluidos en derechos liquidatorios y todos los actos jurídicos complementarios relacionados con el fin de cumplir con el objeto social de esta sociedad; 7) Asesorar a entidades estatales y particulares en asuntos contractuales, así como efectuar el acompañamiento jurídico que sea requerido; 8) Asesorar a entidades estatales y particulares, en asuntos relacionados con el derecho disciplinario, fiscal y de responsabilidad civil. 9) La



SGC874376984

1969

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN COMÚN

Fecha Expedición: 12 de septiembre de 2023 Hora: 14:07:13
 RUTAS DE AUTENTICACIÓN
 Valor: \$ 1,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 80258104358A78

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.cch.org.co/certificados/verificacion y digite el respectivo código, para que visualice la
 imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
 ilimitada, durante 45 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

celebración de contratos de arrendamiento, uso, usufructo y habitación; 10) La contratación de garantías en cualquier modalidad y clase en el sector financiero, brindar las respectivas cauciones al momento de requerirse; 11) La inversión de fondos propios, en bienes muebles e inmuebles, bonos, valores bursátiles y parte de interés en sociedades comerciales, e industriales así como la negociación de toda clase de títulos valores o derechos de crédito; Contratar y brindar toda clase de títulos valores e instrumentos susceptibles de negocio, cedélos, endosarlos y negociados; 12) la celebración de contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios que llegasen a ser necesarios y en general cualquier tipo de materialización de contratos y convenciones autorizadas por la Ley, éstas siendo consideradas como actividades afines y complementarias a su objeto social. Adicionalmente, la sociedad estará facultada para realizar operaciones, contratos y demás actos jurídicos pertinentes para el desarrollo y solución de casos. 13) La representación, y agenciamiento de firmas nacionales o extranjeras; 14) Alquilar y administrar bienes muebles e inmuebles a título oneroso, ya sea para el arrendamiento, subarrendamiento o enajenación de los mismos. Así, las actividades anteriores cuentan con el apoyo de abogados profesionales vinculados a estas áreas de conocimiento, quienes actúan como consejeros legales y prestan sus servicios a todo tipo de clientes; ya fuese esta persona natural o jurídica, nacional o extranjera, privadas, e incluyendo personas que pertenezcan al poder público o entidades reconocidas a nivel nacional, distrital y/o municipal, a través de todos los medios lícitos, medios electrónicos/virtuales y atendiendo a los principios éticos de esta profesión. Así mismo, la sociedad podrá realizar cualquier actividad económica lícita en Colombia o en el exterior; 15) Realizar consultoría y /o asesoría jurídica de proyectos sociales o empresariales. 16) Construcción de documentos de carácter jurídico de diagnóstico y/o análisis de datos. 17) Seguimiento y control jurídico de ejecución contractual. 18) Atención legal, preventiva para la construcción de políticas de ordenamiento y/o políticas de fortalecimiento de protección a derechos humanos fundamentales o relacionados. 19) Realizar capacitaciones de educación no formal en todas las áreas del derecho y afines. 20) Capacitaciones de educación no formal, en el correcto uso de herramientas tecnológicas para procesos de contratación pública. 20) Prestar directamente o a través de terceros todos los servicios legales, técnicos y/o financieros que sean requeridos para el cumplimiento de su objeto social; prestación de servicios legales relacionados con banca de inversión y

Página 2 de 4

legis

República de Colombia

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO - UCNC



SGC874376984

AFLYCW5WELMAN7ST

04/09/2023

WILLIAM J. ROCHA
 NOTARIO DE BOGOTÁ D.C. (E)

VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN SOCIAL

Fecha Expedición: 12 de septiembre de 2023 Hora: 19:27:12
Folio No. 001492100
Vigencia 3,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8236204519870

Verifique el contenido y confiabilidad de esta certificación, ingresando a www.ccb.org.co/certificacioneselectronicas y digite el respectivo código, para que visualice la imagen pegada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

financiación de proyectos; 21) Actuar como asesor y/o consultor de entidades públicas, privadas y/o organizaciones internacionales en temas especializados que involucren estudios (prefactibilidad y/o factibilidad), estructuración de procesos de selección (contrataciones directas, mínimas cuantías, concursos de méritos, selecciones abreviadas y licitaciones públicas) y cualquier otro aspecto legal, técnico y/o financiero relacionado con la Ley de Mayo 11 de 2023 esta de modificación legal GROVE GRUPO JURINICO S.A.S. estructuración y/o asesoría especializada en proyectos públicos, privados o mixtos 22) la participación de forma individual o como integrante de un proponente plural (consorcio, unión temporal, etc.) en procesos de selección adelantados por entidades públicas y/o privadas y/o mixtas y/o organizaciones internacionales (en Colombia o en cualquier otro país) que tengan por objeto la prestación de servicios jurídicos, de consultoría y/o servicios técnicos y/o financieros requeridos por dichas entidades, así como llevar a cabo todas las actividades que sean necesarias para ejecutar el objeto de los contratos que sean suscritos con ocasión de la participación de la sociedad en los respectivos procesos de selección.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$3.000.000,00
No. de acciones : 3.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$1.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$1.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : \$1.000,00



SGC874375983

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y DOCUMENTACIÓN SOCIAL

Fecha Expedición: 12 de septiembre de 2021 Hora: 15:07:15
Periodo de: 20200101 al 20210831
Valor: \$ 7,000

Nº 1969

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 83268224528AF8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/certificados y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del Representante Legal, cuyo suplente podrá reemplazarlo en sus faltas ajenas, temporales o accidentales. El Representante Legal puede celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal y su suplente, son elegidos por la Asamblea General de Accionistas, por el periodo que libremente determine la asamblea o en forma indefinida, si así lo dispone, y sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Representante Legal puede celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 30 de abril de 2021, de Accionaria Única, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 2021 con el No. 02700894 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Diego Fernando Marín Ronje	C.C. No. 1075357863

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Fernanda Marín Lozano	C.C. No. 12122604

REFORMAS DE ESTATUTOS

Página 1 de 1



SGC874375983

6W4W6FXEJN4JX99

04/09/2023
WILLIAM GARCÍA ROCHA
NOTARIO B DE BOGOTÁ D.C. (E)

CERTIFICADO DE SITUACIÓN Y REPRESENTACIÓN SOCIAL

Fecha Expedición: 10 de septiembre de 2021 Hora: 13:47:13
Artículo No. 247 del Código de Comercio
Valor: \$ 7,000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 82368204558A78

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que mediante la imagen generada al momento de su expedición, la verificación se pueda realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

Acte No. 3 del 29 de mayo de 2021
de la Accionista Unión

INSCRIPCIÓN

02591400 del 28 de junio de
2021 del libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del constituyente del 30 de abril de 2021, inscrito el 30 de abril de 2021 bajo el número 82760809 del libro IX, comunicó el accionista Único:

Diego Fernando Marín Henje

Domicilio: Bogotá D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: 6919

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Fecha de configuración de la situación de control: 30-04-2021

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.



SGC074376982

Nº 1969

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REINSERCIÓN RUES

Fecha Expedición: 13 de septiembre de 2023 Hora: 15:27:18
RUELA NO. 4001002040
Valor: \$ 7,300

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 133C8104358A96

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.cch.org.co/certificados/verificacion y digite el respectivo código, para que valide la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 18 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6910

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2325 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 14.649.860

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6910

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción: 19 de diciembre de 2022. Fecha de envío de información a Planeación: 28 de junio de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 ENLTV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2002. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Página 1 de 1

legis

República de Colombia

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO - UCNC



SGC074376982

SFP1TVCAMKSR5RBL

04/09/2023

WILLIAM J. GARCIA
NOTARIO DE BOGOTÁ D.C. (E)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de septiembre de 2023 Hora: 15:07:15
Sede: Bogotá, D.C.
Valor: \$ 7.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 00000000000000000000

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.cch.org.co/verificacionelectronica y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 90 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 507 de 1995.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 10 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



80C274376981

1969

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 10 de septiembre de 2023 Hora: 10:27:15
Hoja No. 001 de 001
Vigencia: 30/09/2024

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 82348264569634

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co/certificados/verificacion y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, dentro de 10 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: MORENO Y ASOCIADOS CONSULTORES SAS
Nit: 900825884 3, Régimen Común
Domicilio principal: Sepé (Cundinamarca)

MATRÍCULA

Matrícula No. 02642237
Fecha de matrícula: 17 de enero de 2014
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 14 de junio de 2023
Grupo NITF: Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Km 15 Vía Chia Cajica Centro
Empresarial No. 641
Municipio: Cajicá (Cundinamarca)
Correo electrónico: morenoydcconsultores@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3144749947
Teléfono comercial 2: 8151439
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Km 15 Vía Chia Cajica Centro

Empresarial No. 641

Municipio: Cajicá (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación: morenoydcconsultores@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3144749947
Teléfono para notificación 2: 8151439
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Folios 1 de 8



SGC274376981

QRY816WSSKCFZV0

04/09/2023
WILLIAM D. REA ROLCHA
NOTARIO DE BOGOTÁ D.C. (E)

REGISTRO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de septiembre de 2023 Hora: 13:07:35

Acto No. 100/2023

Valor: \$ 7.200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8236126456834

Verifique el contenido y veracidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/verificadordocumentos y siga el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 48 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado No. sin num del 5 de enero de 2016 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de enero de 2016, con el No. 02052140 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza comercial denominada MORENO Y A D CONSULTORES SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

El objeto social de la sociedad corresponderá a: Asesorías y consultorías legales en todas las áreas, de control interno y calidad, servicios públicos domiciliarios, transporte, jurisdicción coactiva, Consultoría y asesoría a instituciones educativas, elaboración de manuales y procedimientos administrativos, asesoría y evaluación de proyectos de factibilidad e inversión, elaboración y estructuración de proyectos sociales, programas y proyectos de desarrollo y participación comunitaria, factores socioculturales, labores interrelatadas o complementarias a la prestación de servicios que requieran conocimientos y métodos especiales en determinadas profesiones liberales, tales como: las ciencias administrativas, el derecho y las ciencias políticas, las ingenierías, especialmente la ingeniería de sistemas, informática, ambiental, electrónica, electrónica, industrial, civil, aeroportuaria y de telecomunicaciones, la estadística, la bibliotecología y archivística. En el área médica, las auditorías y servicios de concurrencia médica. En todo lo atinente y/o conexas al control, auditoría jurídica, interventoría, supervisión, administración, dirección, operación y manejo de sus actividades, así como de sus organismos y entidades, asesoría, consultoría, planeación, organización, dirección, supervisión, control, auditoría jurídica, de sistemas, finanzas, interventoría, documentación y archivo en todos los aspectos, operaciones y formas relacionadas con las profesiones



CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD Y REPRESENTACIÓN SOCIAL

Fecha Expedición: 12 de septiembre de 2023 Hora: 13:37:13

Notario No. 43148444
Valori 1,170

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8236830456834

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccm.org.co/verificadocertificados y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se podrá realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

liberales antes mencionadas. Gestión y resultados de cumplimiento y legalidad del control interno y de sistemas, auditoría electoral a partidos, movimientos políticos y los candidatos a elección popular; auditorías en el sector salud particularmente, auditoría médica, en salud y clínica y auditoría de concurrencia médico hospitalaria. De la misma forma prestara los servicios de consultoría, auditoría jurídica e interventoría en general, aseguramiento y acompañamiento de la calidad en general, en cualquier tipo de empresas públicas o privadas, diseño, implementación y evaluación del control interno, capacitación y formación en áreas relacionadas con las actividades enunciadas. Prestación de servicios y suministro de diseños, implementación, montaje, supervisión, consultoría, interventoría, auditoría jurídica, de sistemas, asesoría, ejecución y/o acompañamiento en proyectos financiados con recursos de participación y regalías a los sectores de educación, salud, servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, en procesos de modernización municipal y departamental o regional en temas de transporte, tránsito e infraestructura, salud, educación, podrá realizar asesoría y consultoría en procesos de reestructuración, podrá realizar consultoría y litigio en materias contractuales generales, contratación pública, derecho público, civil, administrativo, laboral, penal y financiero, en general, la prestación de los servicios de consultoría, asesoría e interventoría en todos los campos, incluida la capacitación. Asesorías y consultorías en procesos de responsabilidad fiscal. Las labores de enseñanza y capacitación que se realizan con el fin de que los destinatarios de estos servicios se desenvuelvan de manera óptima, solvente y responsable en sus labores diarias, según las exigencias que tenga la ley en la materia, en consecuencia la sociedad podrá dictar toda clase de capacitaciones, conferencias, cursos, talleres, seminarios, coloquios, e implementar mecanismos de evaluación. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas en consorcio o unión temporal o otro medio de asociación con personas, empresas o entidades de toda índole. Así mismo podrá participar en licitaciones y/o concursos públicos o privados e invitaciones a cotizar del mismo orden, bien de manera directa o mediante la conformación de uniones temporales o consorcios o promesas de sociedad futura o mediante todas las formas de colaboración empresarial. Ejecutar todos los actos, contratos preparatorios, complementarios o accesorios de todas las actividades anteriores, y en general podrá realizar los actos directamente relacionados con su objeto social y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o

Página 2 de 4

legis

República de Colombia

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO - UCNC



SGC474378980

P24NUK47CECG01A2

04/09/2023

WILLIAM D. GARCÍA
NOTARIO DE BOGOTÁ D.C. (E)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de septiembre de 2023 Hora: 11:07:13
Módulo No. 002400040
Página: 2 de 2

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 82181045004

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/verificacioncertificados y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 90 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad, y que sean conducentes al buen logro de sus fines.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$20.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : \$20.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$10.000.000,00
No. de acciones : 500,00
Valor nominal : \$20.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$10.000.000,00
No. de acciones : 500,00
Valor nominal : \$20.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y representación legal de la sociedad, corresponde exclusivamente y de manera permanente sin limitación alguna al Gerente General de la sociedad, quien será el representante legal, quien podrá tener un suplente que será designado en su momento por la Asamblea de Accionistas para reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Sin perjuicio de las facultades asignadas por la ley, el gerente general de la sociedad y el representante legal suplente, tendrán las siguientes facultades: (I) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente (II) Usar la firma social y ejecutar y/o realizar y/o celebrar todos los actos contractuales necesarios para el desarrollo



SGC074376979

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de septiembre de 2023 Hora: 15:07:15
Escrito No. 000181065
Valores: \$ 0,000

Nº 1969

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 000000400004

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que valide la fecha generada al momento de su expedición. La verificación se podrá realizar de manera ilimitada, dentro de 15 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

del objeto social, sin limitación alguna. (III) Crear los cargos que sean indispensables para el funcionamiento de la sociedad, nombrar y remover los empleados bajo su dependencia y, velar porque los empleados de la sociedad cumplan con todos sus deberes; (IV) Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que estime necesarios para representar a la sociedad y delegarles las facultades que a bien tenga; (V) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; (VI) Elaborar el informe que debe presentar a la Asamblea General de Accionistas en sus sesiones ordinarias; (VII) Presentar a la Asamblea de Accionistas cuando ella lo solicite o cuando de acuerdo con la ley sea pertinente, los estados financieros de la sociedad, así como los informes sobre determinados aspectos de la marcha de los negocios sociales y sobre los resultados económicos de la corporación; (VIII) Convocar a la asamblea a reuniones ordinarias o extraordinarias de conformidad con lo previsto en estos estatutos y la ley; (IX) Promover y sostener toda clase de juicios, gestiones o reclamaciones necesarias para la defensa de los intereses sociales; (X) Tomar todas las decisiones que sean conducentes en relación con los derechos y obligaciones de la sociedad por su condición de socia o accionista en otras sociedades o de asociada y fundadora en entidades sin ánimo de lucro y en general llevar de manera privativa la representación de la misma en el ejercicio o cumplimiento de tales derechos y obligaciones (XI) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas (XII) Cumplir las demás funciones previstas en la ley y/o en estos estatutos, así como las que por naturaleza del cargo le correspondan. En desarrollo de sus funciones podrá sin ninguna limitación: Comprar, vender, contratar, transitar, comprometer, arbitrar, compensar, denegar, novar, interponer todo género de recursos, comparecer en los juicios que promuevan contra la sociedad o que ella deba promover recibir dineros en metálico, celebrar el contrato de cambio en todas sus manifestaciones y firmar letras, pagarés, cheques ejecutar préstamos bancarios, girar cheques, libranzas, giros y toda clase de títulos valores, así como negociarlos, aceptarlos, endosarlos, tenerlos, prestarlos, cobrarlos, pagarlos, exigir, cobrar y percibir cualesquiera cantidades de dinero que se adeuden a la sociedad o que ella tenga derecho u obligación de cobrar, condonar deudas, y en fin, desarrollar todas las actividades que al desempeño de su cargo y al logro del objeto social requieran o sean consideradas a su juicio pertinentes.

NOMBRAMIENTOS

Página 5 de 5

legis
República de Colombia

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO - UCNC



SGC074376979

41184GIJPAUNR5R9

04/09/2023
WILLIAM U...
NOTARIO DE BOGOTÁ D.C. (E)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN SOCIAL

Fecha Expedición: 11 de septiembre de 2023 Hora: 15:07:15
Código No.: 02562545
Valor: 3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 025625450000

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/verificacion y digite el respectivo código, para que visualice la imagen anexada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 90 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Mediante Documento Privado No. 114 num del 5 de enero de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de enero de 2016 con el No. 02632140 del Libro IX, se designó al:

CARGO	USUARIO	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Morano Gomez Yohana Mercedes	C.C. No. 090800038618746

REPOSICIÓN DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 005 del 11 de marzo de 2020 de la Accionista Única	02562545 del 1 de julio de 2020 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 1462 de 2015, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 72 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.



SGC874376978

Nº 1969

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de septiembre de 2023 Hora: 15:07:15
 Sesión No. 462162045
 Votos: 2 9,333

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 82268254568638

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.sgc.gov.co/certificados/verificacion y digite el respectivo código, para que visualice la
 imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
 ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6910
 Actividad secundaria Código CIIU: 7020

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2018 del CANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrita en el formulario NUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 0

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 6910

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del NUES.

En el Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMMLV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 528 de 2009. Recuerda ingresar a www.supersonidades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Página 1 de 1

legis

República de Colombia

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO - UCNC



SGC874376978

ZTA2E91YENHNGOAT

04/09/2023

WILLIAM URRUTIA
 NOTARIO B.P. BOGOTÁ D.C. (E)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 11 de septiembre de 2023 Hora: 11:07:15

Entidad: S.A. 0007402040
Rutero: 873.190

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 8236809550451

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccm.org.co/certificados/verificacion y digite el respectivo código, para que elimine la imagen asociada al contenido de su expedición, la verificación se podrá realizar de manera ilimitada, durante 90 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 15 de noviembre de 1995.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23682045EB96F

12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 15:07:14

AB23682045

PÁGINA: 1 DE 2

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : ROA PINZON Y ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S

N.I.T. : 901137158 2 ADMINISTRACIÓN : DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02897598 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2017

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 30 DE MARZO DE 2023

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2023

ACTIVO TOTAL : 217,382,859

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 12 B NO. 8 23 OF 314

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : ROAPINZON.ABOGADOS@GMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : CL 12 B NO. 8 23 OF 314

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : ROAPINZON.ABOGADOS@GMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, INSCRITA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 02281690 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA ROA PINZON Y ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S.

CERTIFICA:



SGC074376977

Nº 1969



SGC074376977

PBXCEJ01698LUG

04/09/2023

WILLIAM UMBREA ROCHA
NOTARIO 8 DE BOGOTÁ D.C. (E)

DURACIÓN: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD PUEDE REALIZAR, EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA, COMERCIAL O CIVIL, O ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES: A) SUMINISTRO DE ASESORÍAS JURÍDICAS Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS ANTE LAS DIFERENTES ESTANCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN LAS DIFERENTES RAMAS DE DERECHO; B) COBRO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE; C) TRÁMITES Y ESTUDIO DE DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL; D) SERVICIOS INMOBILIARIOS POR COMISIÓN DE VENTA Y ARRENDAMIENTO DE BIENES; E) ADMINISTRACIÓN DIRECTA O POR MEDIO DE CONSIGNACIÓN DE INMUEBLES SOMETIDOS O NO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL, URBANOS O RURALES Y ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS; F) ADMINISTRACIÓN DIRECTA O POR CONSIGNACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES AGRÍCOLAS, FORESTALES, GANADERAS, PECUARIAS, O MIXTAS Y EN GENERAL TODO TIPO DE UNIDAD ECONÓMICA PRODUCTIVA URBANA O RURAL; G) CONTRATAR CON ENTIDADES PÚBLICAS, INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS, SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA Y ENTIDADES TERRITORIALES DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL O DISTRITAL ASÍ COMO ENTIDADES, SOCIEDADES, FUNDACIONES, ASOCIACIONES U ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE CARÁCTER PARTICULAR O PRIVADO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍAS Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL; H) SER SECUESTRE EVALUADOR, PARTIDOR CURADOR, TUTOR ALBACEA COMO AUXILIAR DE LA JUSTICIA; I) ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIÓN EN PROCESOS ARBITRALES NACIONALES E INTERNACIONALES; J) CONSTITUIR O SER PARTE DE ENTIDADES CON ÁNIMO O SIN ÁNIMO DE LUCRO DESTINADAS A LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6910 (ACTIVIDADES JURÍDICAS)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

6820 (ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO)

CERTIFICA:

CAPITAL:

**** CAPITAL AUTORIZADO ****

VALOR	: \$3,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 100.00
VALOR NOMINAL	: \$30,000.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR	: \$1,500,000.00
NO. DE ACCIONES	: 50.00
VALOR NOMINAL	: \$30,000.00

**** CAPITAL PAGADO ****

VALOR	: \$510,000.00
NO. DE ACCIONES	: 17.00
VALOR NOMINAL	: \$30,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE QUE PODRÁ REEMPLAZARLA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23682045EB96F

12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 15:07:14

AB23682045

PÁGINA: 2 DE 2

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017, INSCRITA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2017 BAJO EL NUMERO 02281690 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL)	
ROA PINZON MAURICIO	C.C. 0000000079513792
SUPLENTE	
ROA CASALLAS YULIAN MAURICIO	C.C. 000001010198671

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES PUEDEN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD; LIMITADOS A LA CUANTÍA DE 100 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*** EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE ***
*** FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO ***

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 29 DE MARZO DE 2022
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 26 DE MAYO DE 2023

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA



SGC274376976



SGC274376976

LRWZSD2RJ06SDNB

04/09/2023

WILLIAM D. CASAL
NOTARIO DE BOGOTÁ D.C. (E)

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES MICROEMPRESA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$388,187,706

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 6910

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 7,200

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nº 1969

Certificado Generado con el Pin No: 2804664544935667

Generado el 17 de octubre de 2023 a las 14:53:41

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

EL SECRETARIO GENERAL

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

CERTIFICA

RAZÓN SOCIAL: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

NIT: 900336004-7

NATURALEZA JURÍDICA: Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Acuerdo No 2 del 01 de octubre de 2009. Se crea bajo la denominación ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES Colpensiones, tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, se crea como una Empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, vinculada al Ministerio de la Protección Social, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

Acuerdo No 9 del 22 de diciembre de 2011. La Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo, con la finalidad de otorgar los derechos y beneficios establecidos por el sistema general de seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia.

Oficio No 2012082076 del 28 de septiembre de 2012. La Superintendencia Financiera de Colombia no encuentra objeción para que Colpensiones inicie operaciones como Administradora del Régimen de Prima Media con prestación definida.

Decreto No 2011 del 28 de septiembre de 2012. Artículo 1. Inicio de operaciones. A partir de la fecha de publicación del presente decreto, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones inicia operaciones como administradora de Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Artículo 2. Continuidad del Régimen de Prima Media con Prestación Definida de los afiliados y pensionados en Colpensiones. Los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), mantendrá su condición en la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, así como los derechos y obligaciones que tiene el mismo régimen. Los afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones - Caprecom, mantendrán su condición, derechos y obligaciones que tienen, en el mismo régimen administrado por Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, sin que ello implique una selección o traslado de régimen de Sistema General de Pensiones. Artículo 5 Pensiones Causadas. Las pensiones de los afiliados a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones -Caprecom, causadas antes de la entrada en vigencia del presente decreto, serán reconocidas y pagadas por esta entidad, hasta tanto la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP y Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), asuman dichas competencias.

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co

Página 1 de 4



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



TX7WZAMZSP72AUT

04/05/2023

WILLIAM ROA ROA
NOTARIO DE BOGOTÁ D.C. (E)

legis

República de Colombia

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 2804664544935667

Generado el 17 de octubre de 2023 a las 14:53:41

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

REPRESENTACIÓN LEGAL: La administración de la Administradora Colombiana de Pensiones - (Colpensiones), está a cargo del Presidente, quien será su representante legal. **PARÁGRAFO 1.** El Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), deberá cumplir con los requisitos de idoneidad exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las ausencias temporales o definitivas del Presidente serán suplidas por el Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales, cualquiera de los Vicepresidentes o por el Gerente de Defensa Judicial de la entidad, siempre que cumplan con los requisitos del cargo. (Acuerdo 007 del 31 de agosto de 2021). **FUNCIONES DEL PRESIDENTE.** Son funciones del Despacho del Presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES, las siguientes: 1. Dirigir, coordinar, vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos inherentes al desarrollo del objeto de COLPENSIONES, directamente, a través de tercerización de procesos, mediante corresponsales o cualquier otro mecanismo que permita mayor eficiencia en la prestación del servicio, expediendo los actos administrativos que se requieran para tal efecto. 2. Ejercer la representación legal de la Empresa. 3. Delegar o constituir apoderados especiales para la representación judicial y/o administrativa de COLPENSIONES. 4. Dirigir la formulación y ejecución de políticas y estrategias relacionadas con el manejo de la información y la comunicación externa y organizacional. 5. Dirigir las políticas, programas, planes y proyectos para el relacionamiento con los diferentes grupos de interés de COLPENSIONES y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 6. Dirigir la gestión comercial de la Empresa, que involucre el diseño de mercadeo, la divulgación y capacitación, la afiliación de nuevas personas y la administración y fidelización de quienes ya se encuentran afiliados. 7. Dirigir la gestión integral de servicio al cliente en caminata a la atención de los ciudadanos, empleadores, pensionados y demás grupos de interés que permitan satisfacer de forma efectiva, sus necesidades. 8. Impartir directrices para el diseño e implementación del Sistema de Administración Integral de Riesgos, de acuerdo a la normatividad legal vigente y someterlo a la aprobación de la Junta Directiva. 9. Dirigir las políticas que en materia de Gobierno Corporativo adopte COLPENSIONES. 10. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva el proyecto anual de presupuesto, los proyectos de adición y traslados presupuestales, con arreglo a las disposiciones orgánicas y reglamentarias sobre la materia. 11. Presentar para aprobación de la Junta Directiva los estatutos de COLPENSIONES, sus modificaciones y las condiciones generales de carácter salarial y prestacional de los trabajadores oficiales de COLPENSIONES. 12. Presentar a consideración de la Junta Directiva y para aprobación del Gobierno Nacional, las modificaciones a la estructura y a la planta de personal de COLPENSIONES. 13. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva los estados financieros y las operaciones de crédito de COLPENSIONES, de conformidad con las normas vigentes. 14. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva el Código de Ética y Buen Gobierno, así como sus reformas o modificaciones, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y disponer lo pertinente para su conocimiento y aplicación al interior de COLPENSIONES. 15. Desarrollar y dirigir el cumplimiento de las decisiones y acuerdos de la Junta Directiva, ejecutarlas y rendir los informes que le sea solicitados. 16. Dirigir la ejecución presupuestal, comprometer y ordenar el gasto, suscribir los actos, y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el normal funcionamiento de COLPENSIONES. 17. Nombrar y remover al personal de la Empresa que no corresponda a otra autoridad, dirigir los procesos de selección de personal, así como expedir los actos relacionados con la administración del mismo (tales como la distribución de personal, la suscripción y terminación de los contratos de trabajo, la expedición del manual de funciones y de competencias laborales y la creación o supresión de grupos internos de trabajo). La vinculación de los Vicepresidentes y los Jefes de Oficina de la Empresa deberá contar con la aprobación previa de la Junta Directiva. 18. Proponer para aprobación de la Junta Directiva, previo estudio técnico, la creación, supresión o fusión de Gerencias, Direcciones, Subdirecciones y Direcciones Regionales que se requieran para el cumplimiento de las funciones de la Empresa. 19. Crear, modificar o suprimir puntos de atención y corresponsales que se requiera para el cumplimiento del objeto social. 20. Recomendar a la Junta Directiva la aceptación de cesiones y subrogaciones con Empresas Públicas. 21. Presentar para aprobación de la Junta Directiva el manual de contratación, con sujeción a lo previsto en la Ley. 22. Ejercer la función de control disciplinario interno en los términos de la Ley 734 de 2002 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 23. Dirigir las políticas para el fortalecimiento y mantenimiento de la cultura de autocontrol, y la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 24. Dirigir las políticas de control de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y demás actividades ilícitas, aprobadas por la Junta Directiva de Colpensiones que sean necesarias para el cumplimiento de la Empresa. 25. Rendir informes solicitados por las entidades de inspección, control y vigilancia y las demás autoridades a las cuales se les deba reportar información. 26. Las





SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 2804664544935667

Nº 1969

Generado el 17 de octubre de 2023 a las 14:53:41

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

demás inherentes a la naturaleza de la dependencia, las establecidas por la Ley, los reglamentos o los estatutos. PARAGRAFO TRANSITORIO. Facultar al Presidente de COLPENSIONES por única vez, para escoger y contratar de los servidores públicos que hoy ocupan cargos de Vicepresidentes y Directores de Oficina Nacional en forma permanente, que surtieron los procesos de selección propios de la Administradora y que fueron aprobados por la Junta Directiva, para ocupar los cargos de Vicepresidentes y Jefes de Oficina. (Acuerdo 106 del 01 de marzo de 2017).

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representacilegal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Jaime Dussan Calderon Fecha de inicio del cargo: 26/01/2023	CC - 12102957	Presidente
Jorge Alberto Silva Acero Fecha de inicio del cargo: 14/12/2017	CC - 19459141	Suplente del Presidente (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2019001331-000 del día 8 de enero de 2019, la entidad informa que con documento del 17 de diciembre de 2018 renunció al cargo de Suplente del Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 01-2019 del 11 de enero de 2019. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).
Javier Eduardo Guzmán Silva Fecha de inicio del cargo: 21/12/2018	CC - 79333752	Suplente del Presidente
Diego Alejandro Urrego Escobar Fecha de inicio del cargo: 10/02/2022	CC - 79983390	Suplente del Presidente
Oscar Eduardo Moreno Enriquez Fecha de inicio del cargo: 11/07/2019	CC - 12748173	Suplente del Presidente (Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Comercio, con información radicada con el número 2020289549-000 del día 1 de diciembre de 2020, que con documento del 12 de noviembre de 2020 renunció al cargo de Suplente del Presidente y fue aceptada por la Junta Directiva en Acta 019 del 12 de noviembre de 2020. Lo anterior de conformidad con los efectos establecidos por la Sentencia C-621 de julio 29 de 2003 de la Constitucional).
María Elisa Moron Baute Fecha de inicio del cargo: 21/03/2019	CC - 49790026	Suplente del Presidente



YLMFSXFNRCNGSJN3

04/09/2023
WILLIAM URREGO
NOTARIO DE BOGOTÁ D.C. (E)

Impreso el 2023 en Colombia



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 2804664544935667

Generado el 17 de octubre de 2023 a las 14:53:41

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

Natalia Guerrero Ramírez

NATALIA CAROLINA GUERRERO RAMÍREZ
SECRETARIA GENERAL

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Nº 1969



CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL

En la ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023), entre quienes suscriben este documento, de una parte, ROA PINZON Y ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S, identificada con Nit No. 901137158-2, sociedad legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por MAURICIO ROA PINZON, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.513.792, por otra parte, LEGAL GROVE GRUPO JURIDICO SAS, identificada con Nit No. 901481192-7, sociedad legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por DIEGO FERNANDO MARIN MONJE, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.075.257.863 y por otro lado MORENO Y & D CONSULTORES SAS, identificada con Nit No. 900925686-3, sociedad legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por YOHANA MORENO GOMEZ, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 39.818.746, hemos decidido conformar una Unión Temporal, la cual se denomina UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023, que se rige por las siguientes cláusulas:

Primera. - Objeto y Alcance: El objeto del presente documento es la integración de una Unión Temporal entre ROA PINZON Y ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S., LEGAL GROVE GRUPO JURIDICO SAS y MORENO Y & D CONSULTORES SAS, con el propósito de complementar las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen la misma, para ejecutar contractualmente la representación judicial y jurídica a COLPENSIONES, en los casos que sean asignados por esa entidad.

Nuestra responsabilidad es solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Segunda. - Nombre y Domicilio: La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES 2023, y su domicilio es la ciudad de Bogotá D.C., con dirección en la Calle 12B No. 8-23 Oficina 314, teléfono 3222700526; correo electrónico: roapinzon.abogados@gmail.com

Tercera. - Condiciones y extensión de la participación de acuerdo con la ley: La participación de cada una de las partes que conforman el ciento por ciento (100%), de la Unión Temporal no podrá ser modificada sin el consentimiento previo de la entidad, y será distribuida de la siguiente forma:



04/09/2023

WILLIAM URBANO
NOTARIO DE BOGOTÁ D.C. (E)

NOMBRE	%	ACTIVIDAD
ROA PINZON Y ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S	50%	Actividad a desarrollar en el contrato (administrativos, jurídicos, técnicos y económicos)
LEGAL GROVE GRUPO JURIDICO SAS	40%	Actividad a desarrollar en el contrato (administrativos, jurídicos, técnicos y económicos)
MORENO Y & D CONSULTORES SAS	10%	Actividad a desarrollar en el contrato (administrativos, jurídicos, técnicos y económicos)
TOTAL PARTICIPACIÓN	100%	Total de las actividades contractuales

Cuarta. - Obligaciones y sanciones: Los miembros de la Unión Temporal responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con la entidad. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

Quinta. - Duración: La duración de la Unión Temporal no es inferior a tres (3) años contados a partir de la suscripción del contrato por prestación de servicios con Colpensiones. En todo caso la Unión Temporal durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

Sexta. - Cesión: No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la Unión Temporal, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de la entidad contratante.

Séptima. - Representante legal de la Unión Temporal: La Unión Temporal designó como representante legal de ésta, al señor MAURICIO ROA PINZON, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.513.792, quien está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la unión temporal. Igualmente se nombra como suplente del representante legal al señor DIEGO FERNANDO MARIN MONJE, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.075.257.863, quien tiene las mismas facultades del representante legal principal.

Octava. Cláusulas opcionales: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan la normativa vigente.



SGC17437E972

MP 1969

R.L. MORENO Y & D CONSULTORES SAS

SGC174376972

V4E0C419R.101A0059

Education

~~WILLIAM MURRAY A. ...
NOTARIO & ...~~



MAURICIO ROA PINZON

C.C. 79.513.792

R.L. PRINCIPAL UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES
2023



DIEGO FERNANDO MARIN MONJE

C.C. 1.075.257.863

R.L. SUPLENTE UNIÓN TEMPORAL REPRESENTACIÓN JURÍDICA COLPENSIONES
2023

legis

República de Colombia

UNIÓN COLEGIADA DEL NOTARIADO COLOMBIANO - UCNC

República de Colombia

Página No. 5 -

1969



SGC374378971

mismo. Conoce la Ley y sabe que los Notarios responden de la regularidad formal de las escrituras públicas pero no de la veracidad de las declaraciones de la otorgante. -

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN. El instrumento precedente fue leído en forma legal al compareciente, quien le impartió su aprobación por expresar su voluntad contenida en sus declaraciones. El Notario da fe de que las declaraciones consignadas fueron emitidas por el otorgante y de que se cumplieron todos los requisitos legales y se presentaron los comprobantes requeridos y en consecuencia autoriza con su firma la presente escritura, dejando testimonio de que advirtió al otorgante sobre las relaciones que el contrato genera para él.

La presente escritura ha sido extendida en las hojas con Código de Barras números: PO016170412 - PO016170413 - PO016170414.

En constancia se firma como aparece.

DERECHOS NOTARIALES: \$ 74.900.00

IVA: \$ 51.813.00

SUPERINTENDENCIA: \$ 7.950.00

FONDO NACIONAL DE NOTARIADO: \$7.950.00

RES. 387 del 23 de enero de 2023 DE LA S.N.R.

DIEGO ALEJANDRO URREGO ESCOBAR

CC 79.983.390 de Bogotá D.C.

Actuando como representante legal Suplente de la **Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, EICE, con NIT. 900.336.004-7**

Teléfono :2170100 ext.: 1680

E-MAIL: poderesjudiciales@colpensiones.gov.co

Firma Fuera del Despacho Artículo 2.2.6.1.2.1.5 Decreto 1069 de 2015

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



PO016170414

8VZTMOJTEWMK297P

17-03-23 PO016170414/2023

WILLIAM URREGO ESCOBAR
NOTARIO PÚBLICO BOGOTÁ D.C. (E)

William Urrego Roaño
Notario 8 (E)

Nº 1969

Página. No - 6 -



William Urrea Rocha

Notario 8 de Bogotá D.C. (E)

Autorizado como Notario encargado
por resolución No. 10866
de fecha 6/ octubre / 23

Fabio O. Castiblanco C.
Notario 8

Notaria 8
Del Círculo de Bogotá D.C.



ORDEN DE EXPEDICIÓN:	SEGUNDA (2ª) COPIA AUTENTICA
ESCRITURA PÚBLICA No.:	MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE (1969)
FECHA:	19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023
HOJAS ÚTILES:	DIECINUEVE (19)
DESTINATARIO:	INTERESADO
EL SUSCRITO NOTARIO 8 DE BOGOTÁ D.C. (E) CERTIFICA: QUE EN EL ORIGINAL DE LA ESCRITURA A QUE SE REFIERE LA PRESENTE COPIA NO APARECE A LA FECHA, NOTA DE REVOCACION Y POR LO TANTO SE PRESUME VIGENTE EN EL PROTOCOLO DE ESTA NOTARIA.	
FECHA EXPEDICIÓN:	lunes, 23 de octubre de 2023 - 04:12 p.m.

William Urrea Rocha
Notario 8 de Bogotá D.C. (E)

NOTA: CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION QUE SE REALICE SOBRE ESTAS COPIAS CONFORME A LA LEY, ES ILEGAL Y PUEDE CAUSAR SANCIÓN PENAL.

Carrera 15 # 82-19 Tels: 7049542 - 2182175 - 2368037 - 2369037 - 6102090
E-mail: notaria8@notaria8.com Página web: www.notaria8.com.co
Bogotá, D.C.



S3XKC503TRTM7AKN

04/09/2023
WILLIAM URREA ROCHA
NOTARIO 8 DE BOGOTÁ D.C. (E)

